

7282

PRINCIPAL

EXPEDIENTE NUM.

FORMA 2-17-D

# SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



MEXICO

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

SEGUNDA OFICINA DE TRAMITE

Año de Iniciación **1967**

Núm. **7282**

Toca al Amparo en Revisión

PRINCIPAL

Promovido por María Solano de Ramírez y Coagrs.

Contra actos de Congreso del Edo. y otras autds.

Ante el Juez de Distrito de **CHIHUAHUA.**

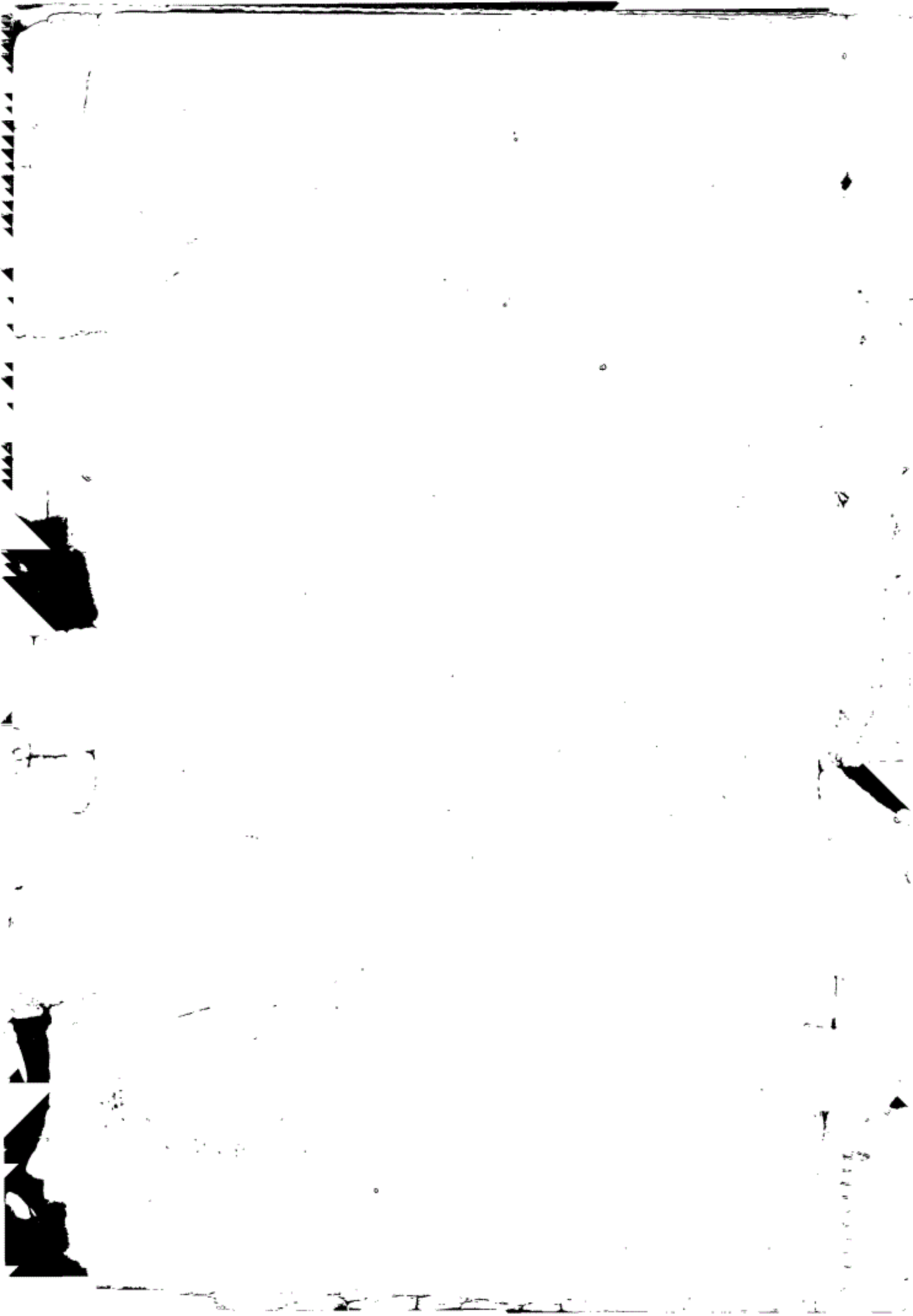
Fecha de ingreso al Archivo



CHIHUAHUA

EXPEDIENTE NUM.

7282



*Don Antonio Carrasco Ferrer*

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**



**MEXICO**

CUADERNOS.

Núm. 7283

**2A. OFICINA DE TRAMITE**

**AMPARO EN REVISION**

Quejoso MARIA SOLANO DE RAMIREZ Y COAGRAVIADOS.

Promueve en su nombre \_\_\_\_\_

por violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución

Federal contra actos del CONGRESO DEL EDO. DE CHIHUAHUA Y OTRAS AUTS.

origado de Distrito de EN EL ESTADO DE HUEHUACUA.

Fecha de iniciación 4 de agosto de 1967

La suspensión del acto fué \_\_\_\_\_

Fecha de la sentencia del inferior 15 de agosto de 1967

" en que se recibieron los autos 11 de septiembre de 1967.

" de la ejecutoria de la Corte \_\_\_\_\_

Acto reclamado Por la expedición del decreto 293 que establece

un impuesto adicional sobre todos los impuestos ordinarios cuyo  
rendimiento será destinado al sostenimiento de la UNIVERSIDAD DE  
CHIHUAHUA.

El juez resolvió SOBRESIENDO Y NEGANDO EL AMPARO.

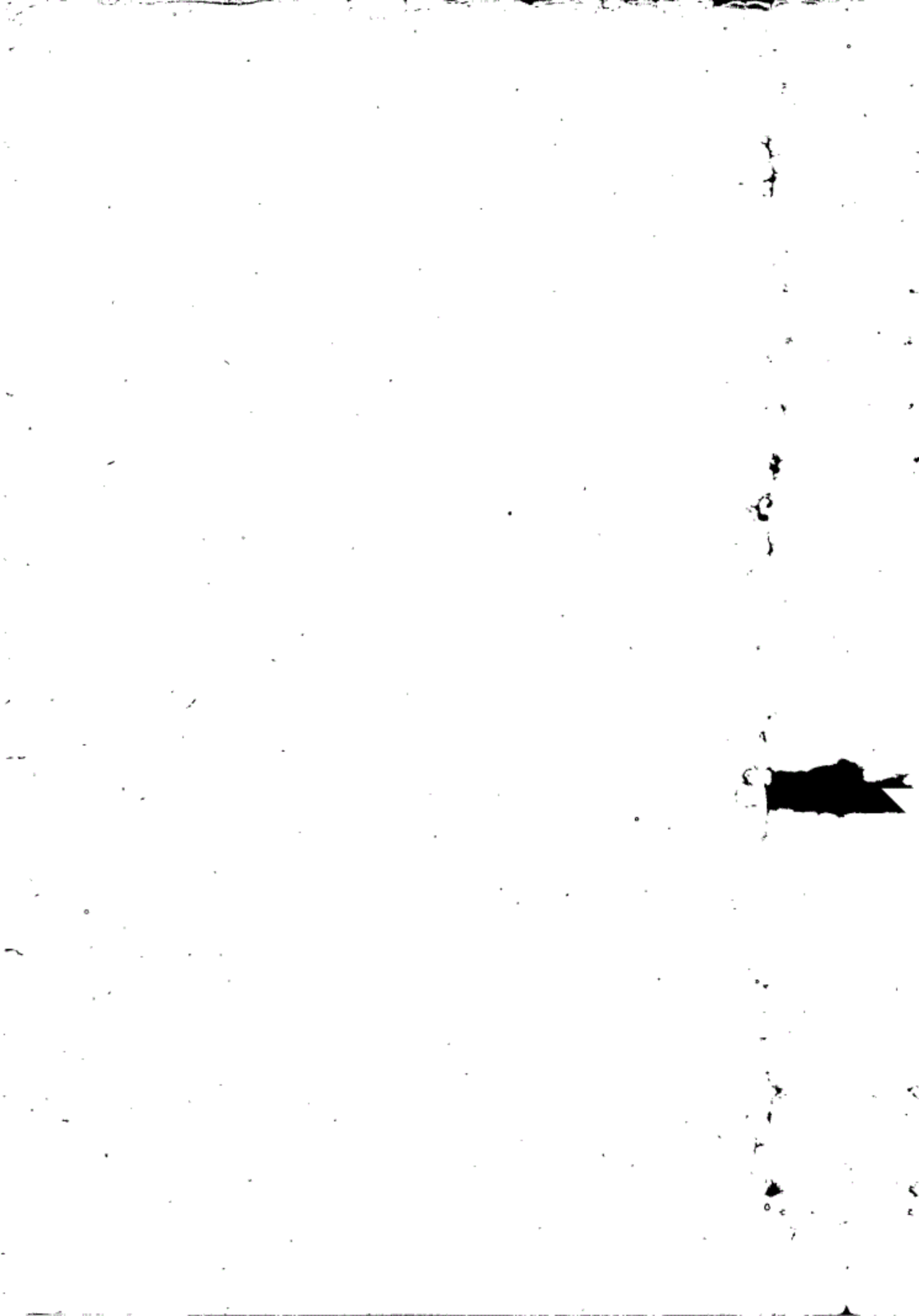
La Corte falló \_\_\_\_\_

Fecha en que se devolvieron los autos \_\_\_\_\_

Actuario,

ADMINISTRATIVO.







PODER JUDICIAL DE LA  
FEDERACION

# AVISO DE INICIACION

Núm. ....

Hoy ha sido admitida la demanda de amparo que MARIA SOLANO .....  
DE RAMIREZ, .....

## SECCION SEGUNDA

AMPAROS

NUM. 5603

promovió ante este juzgado contra actos de H. CONGRESO DEL EDO., .....  
CC. GOBERNADOR DEL ESTADO, C. TESORERO GRAL. Y RECAU .....  
DADOR DE RENTAS DEL ESTADO. .....

que considera violatorios de los artículos 14 y 16 ..... de la Constitución General de la República; quedando registrado en el juicio respectivo bajo el número...  
230/67.

Lo que tengo la honra de comunicar a usted en cumplimiento de lo prevenido por el artículo 148 de la Ley de Amparo Vigente, suplicándole se sirva dar cuenta a esa Superioridad.

Protesto a usted mi atenta consideración.

Chihuahua, Chih., a 4.º de Agosto ..... de 1967...

EL JUEZ PRIMERO DE  
DISTRITO EN EL ESTADO.



LIC. ERNESTO DIAZ INFANTE.

93070339

Al C. Secretario General de Acuerdos de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México D. F.

Al C. Secretario de Acuerdos del H. Tribunal Colegiado del 3er. Circuito. Saltillo, Coah.

jrr.

1992

Dec 11 10 37 AM '67

2. *Phylogenetic relationships*—The phylogenetic relationships among the 10 species of *Phragmites* were determined using the maximum parsimony method. The analysis was performed using the computer program PAUP 4.0 (Swofford, 1999). The analysis was based on the 1000 characters of the DNA sequence data. The characters were ordered by increasing homoplasy index (CI) and then by increasing consistency index (CI). The analysis was performed using the following settings: heuristic search, 1000 random addition sequences, 1000 iterations of branch swapping, and 1000 iterations of tree pruning. The results were displayed as a tree diagram using the computer program TreeView 1.6.6 (Molloy, 2002).



PODER JUDICIAL DE LA  
FEDERACION



SECCION SEGUNDA

AMPAROS

NUM. 6527

C. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA  
H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.  
MEXICO D. F.

En grado de revisión estoy remitiendo -  
a esa Superioridad los autos originales del Juicio-  
de amparo 230/67 promovido por MARIA SOLANO DE RA-  
MIREZ y coagraviados contra actos del H. Congreso -  
del Estado y otras autoridades por violación de --  
los artículos 14 y 16 Constitucionales y constante-  
de ochenta y cuatro fojas útiles así como tambien -  
el escrito de expresión de agravios constante de -  
dos fojas útiles.

Reitero a Usted mi atenta y distin-  
guida consideración.

Chihuahua, Chih., 31 de Agosto de 1967.  
EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL EDO.

LIC. ERNESTO DIAZ INFANTE.



SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA  
NACION

80055

SEP 8 11 07 AM '67

OFICINA DE  
CERTIFICACION  
JUDICIAL Y  
CORRESPONDENCIA

Recibido por correo con los  
amexos que se citan.

E. Martínez Salas

E. Martínez Salas



H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

México, D. F.

JOSE OSCAR FIERRO-SAMENZ con el

carácter que tengo acreditado en el juicio de amparo señalado al rubro, con fundamento en el inciso a) de la Fracción I del Artículo 84 de la Ley de Amparo, ante esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, vengo a interponer el recurso de revisión, contra la sentencia dictada por el C. Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en el juicio de amparo señalado al rubro, promovido contra actos del Congreso Local de Chihuahua, C. Gobernador y Tesorero General del mismo Estado, y del C. Recaudador de Rentas de Cd. Cuauhtémoc, Chih.

La sentencia recurrida fué pronunciada el día 15 del mes en curso, publicada en libro el día 16, surtiendo sus efectos el día 17 de este propio mes, y como se interpuso un día feriado que fué el día 20, no encuentro dentro del término legal para recurrir dicha sentencia.

En cumplimiento del Artículo 85 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política Mexicana, manifiesto que la sentencia contra la cual interpongo el recurso de revisión, causó a los quejosos los siguientes

## A g r a v i o s :

1o.-El Juez "a quo", en el Cuarto Considerando de la sentencia recurrida, dice a la letra:

"Los anteriores conceptos de violación, son infundados. En efecto, el decreto impugnado adiciona los artículos 2106 y 2079 del Código Administrativo en el Estado, para quedar como sigue: "2106.-Los ingresos ordinarios con aquellos que se obtienen normalmente para la atención del gasto público.-Con este mismo carácter se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este Artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Artículo 2079.-A la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, de acuerdo con lo establecido en este Código y su Reglamento. -Los ingresos que le corresponda percibir a la Universidad de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el artículo 2106, serán recaudados por las Oficinas Recaudatorias, simultáneamente con el enteró de los impuestos ordinarios, cuyo rendimiento se concentrará directamente en la Tesorería General del Estado, quien lo entregará al Patronato de la Universidad de Chihuahua." De la simple lectura de los artículos transcritos, se advierte que no es verdad lo que afirman los quejosos de que se establece un gravamen o retribución por la educación universitaria que imparte el Estado de Chihuahua, pues para poder coincidir con el evento que se menciona en los conceptos de violación, era necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir la enseñanza o que gravara de cualquier forma la instrucción universitaria, lo que no sucede, sino que el decreto, al adicionar el Artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, establece únicamente el impuesto sobre la tasa de los impuestos ordinarios, derechos y productos que percibe el Estado, para ser destinados al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Por lo que los preceptos impugnados no gravan la educación universitaria, sino que el impuesto recae sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que desarrollan ya calificadas por el Estado y únicamente adiciona los impuestos que anteriormente pagaban, con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua; que es un gasto público como lo requiere la Constitución en su artículo 31 Fracción II, ya que es indudable que tiene ese carácter la educación universitaria a cargo del Estado, de conformidad con lo que ordena el Artículo 3o. de la Constitución Federal. El anterior criterio se basa en la Tesis Jurisprudencial número 23 publicada en las páginas 75 a 79 de la primera parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, editado en 1965. En estas condiciones el Dero de 1967 no es violatorio de los Artículos 3o. Fracción VII, 1o. 16 de la Constitución".

Las anteriores consideraciones del "a quo", son incongruentes y contradictorias puesto que, sin que aparezca del Decreto impugnado ni una sombra, siquiera, de que el 4% que grava TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS Y DERECHOS para destinarlo ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, sea un aumento de tasa, la sentencia recurrida así lo declara enfáticamente y afirma que ese aumento de tasa, como piadosamente lo denomina, no grava la instrucción universitaria, puesto que, para que tal cosa ocurriera, sería necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir la instrucción universitaria. Este argumento nos llevaría a la conclusión de que en los colegios de paga, la instrucción resulta gratuita, debido a que, como los alumnos, por su natural dependencia económica, no hacen los pagos de sus colegiaturas, la instrucción que reciben no es a título onerosa.

Como queda demostrado, el impuesto impugnado ha sido creado con el exclusivo fin de sostener a la Universidad de Chihuahua, en su misión educadora, con detrimento de los causantes de dicho impuesto y en contravención del Artículo 30. Constitucional que establece categóricamente que la instrucción que imparta el Estado debe ser gratuita. Por tanto éste debe ajustarse a sostener a la Universidad en la forma y términos que la Ley de Egresos del Estado en su Partida 217 fracciones IV y V señala, que destina para la Universidad la suma de \$4.630.000.00, sin que dicha partida pueda modificarse, sino con cargo a los gastos públicos y de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria del Artículo 30. Constitucional. Tal disposición legal establece, entre otras condiciones, la capacidad del presupuesto y no faculta al Estado para fijar impuesto alguno para el sostenimiento específico de los centros educativos superiores; en consecuencia, el Juez a quo, al no tomar en consideración lo establecido por el precepto Constitucional invocado, viola en agravio de los quejosos el principio de legalidad garantizado por los artículos 14 y 16 Constitucionales.

II.-La sentencia recurrida establece que el segundo concepto de violación es infundado, pretendiendo que la expedición del Decreto impugnado fué expedido por el Congreso del Estado en uso de las facultades que le confieren los artículos 64 Fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado. Tal apreciación es inexacta, porque si bien es cierto que la fracción I del Artículo 64 da facultades al Congreso para legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado, expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones sean necesarias para su Gobierno y administración, también es cierto que la fracción VI del mismo Artículo, sólo faculta al Congreso para fijar anualmente todas las bases para la administración pública del Estado, PREVIO EXAMEN DEL PRESUPUESTO que presente el Ejecutivo; el Artículo 162 invocado por el a quo, faculta al Congreso para expedir las disposiciones hacendarias que establezcan las contribuciones necesarias para los gastos públicos, en VISTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, el cual no está facultado para modificar; además deberá sujetarse a lo establecido por el Artículo 163 que establece que el año fiscal para el Estado y los Municipios se contará del 1.º de enero al 31 de diciembre de cada año. Por tanto las facultades del Congreso son limitadas, máxime cuando no fundó ni motivo el Decreto impugnado y establece un impuesto exclusivo, esto es: privativo, prohibido por la Constitución Política del Estado, como se ha demostrado anteriormente al establecer las restricciones establecidas en el artículo 162 de la misma, por la Constitución Federal, como se comprueba plenamente con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia definida:

"De acuerdo con el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, para la validez constitucional de un impuesto, se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales: primero, que sea proporcional; segundo, que sea equitativo, y tercero que se destine al pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo establecido por la Constitución, ya que ésta no concedió una facultad omnimoda para establecer las exacciones que, a juicio del Estado, fueran convenientes, sino una facultad limitada por esos tres requisitos"

Tomó LXV.-	Arrigunaga Peón Manuel de	Pág. 2723
" LXIX.-	Cabezut Alberto M. y Coags.	" 398
" LXIX.-	Cabezut Alberto M. y Coags.	" 5432
" LXXXIII.-	Bolaños García Fulgencio.	" 813
" LXXV.-	Mora Manuel F.	" 3603

(Copilación del Semanario Judicial de la Federación, T. LXX, Pág. 1000)

Por tanto, al dar interpretación indebida a las disposiciones constitucionales que se han citado y al no acatar la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia, el Juez sentenciador falta a los más elementales principios de legalidad violándolos en nuestro agravio y en contravención de los Artículos 14 y 16 Constitucionales.



III.-El Decreto impugnando de inconstitucionalidad, expresa con toda claridad y precisión: "Se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos....." No cabe, en consecuencia, ninguna interpretación gramatical ni lógica que no sea la que se expresa literalmente.

Mucho menos cabe la interpretación arbitraria que pretende darle el Juez "a quo", en el sentido de que se trata de un aumento de tasa sobre los impuestos. Por tanto el decreto viola los más elementales principios de tributación y jamás se ha dado el caso de que las erogaciones, como son los impuestos gravados, sean motivo de tributación.

Así pues, queda claro que el Decreto de que se trata, grava erogaciones y no percepciones, por lo que es a todas luces ilegal, injusto y monstruoso.

Por tanto viola los principios de justicia y legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, y el Juez, al no tomar en consideración las razones y fundamentos en que basamos nuestra demanda de amparo, viola en nuestro agravio dichas garantías constitucionales.


Por todo lo expuesto y fundado, a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, pedimos atentamente:

PRIMERO:-Tener por interpuesto en tiempo y forma el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de garantías.

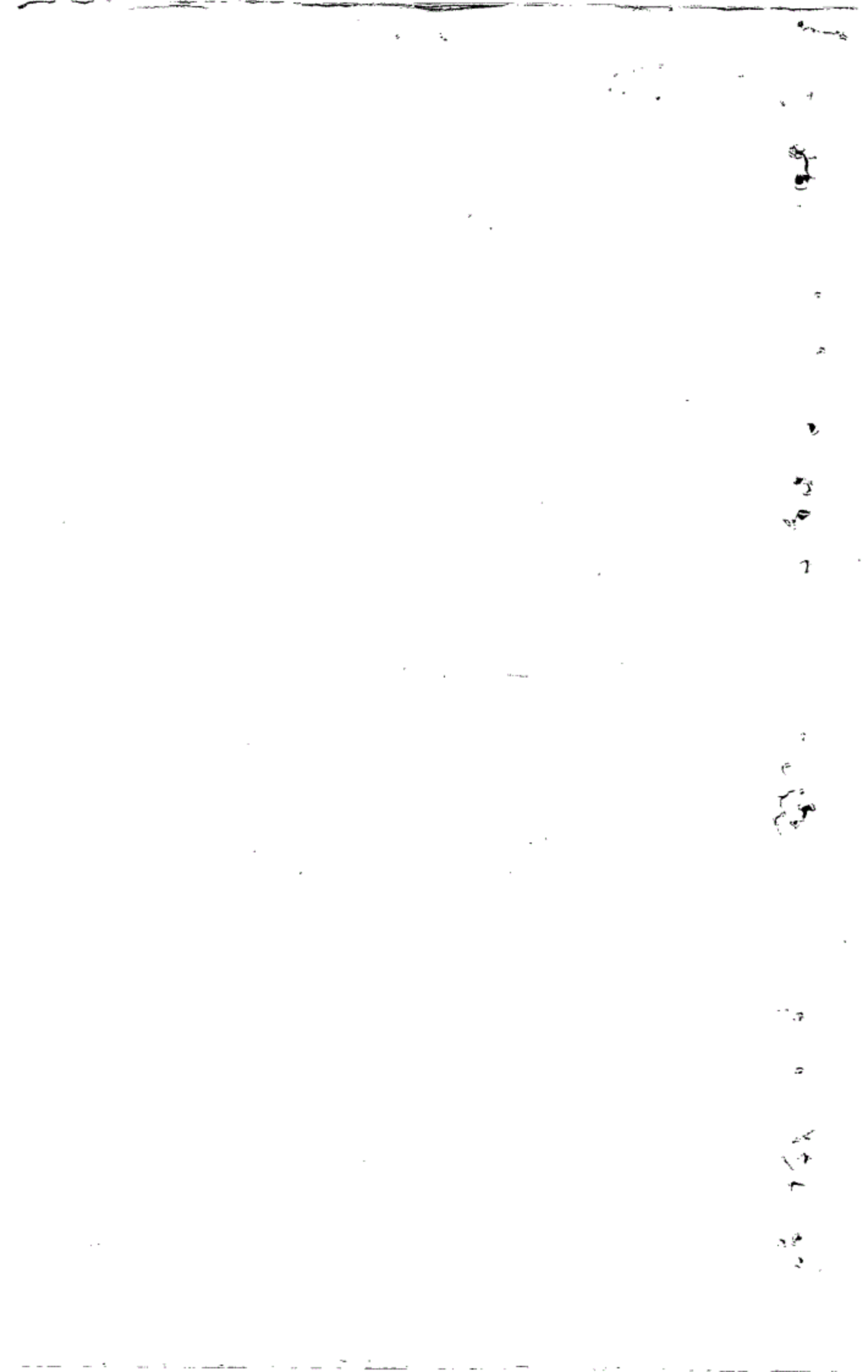
SEGUNDO:-Declarar operantes los agravios que se han dejado expuestos en este escrito, revocando la sentencia recurrida.

TERCERO:-Sentenciar declarando que la Justicia de la Unión nos ampara y protege contra los actos reclamados, emanados de las autoridades responsables.

Chihuahua, Chih., 22 de Agosto de 1967.  
Atentamente.



*ver  
T. 10/10 que  
82 y 79  
de los autos a favor de la Unión*





SEGUNDA OFICINA

DE TRAMITE

TOCA # 7282/67.

México, Distrito Federal, a diecinueve de septiembre de mil novecientos sesenta y siete.

Con el aviso de iniciación y el oficio de remisión de los autos, fórmese y regístrese el toca relativo al -- juicio de amparo promovido por María Solano de Ramírez y coagraviados contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y de otras autoridades. Acúcese recibo. Visto el -- recurso de revisión que se hace valer en contra de la sen tencia dictada en el juicio de amparo a que este toca -- corresponde y teniendo en consideración que en el presen te caso se debate el problema de la inconstitucionalidad de una Ley, y demás estando interpuesto en tiempo y forma dicho recurso, con fundamento en los artículos 84, fracción I, inciso a), 86 y 90 de la Ley de Amparo y 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa-- ción, se acuerda:

I.- Se admite el recurso de revisión interpuesto -- por la parte quejosa; pónganse los autos a la vista de -- las partes por diez días, para que aleguen lo que a sus derechos convenga; transcurrido ese plazo pase el asunto por igual término al Ministerio Público, para que formule pedimento, y cumplido ese requisito, túrnense los autos -- al PLENO para su resolución.

II.- Notifíquese.

Lo acuerdo y firma el ciudadano licenciado Agapito Pozo, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la -- Nación. Dey fe.

rpm/"mggg"

29 SET. 1967

En \_\_\_\_\_ por lista de la misma  
fecha, se notificó la resolución anterior a los intere-  
sados y por oficio a las autoridades responsables según  
minuta que se agrega.

3 OCT. 1967

En \_\_\_\_\_ Notificado el C. Procurador  
General de la República del auto que antecede,  
dijo que designa para intervenir en este negocio  
al C. Agente Licenciado Manuel quien  
estando presente quedó enterado y firma.

EL PRIMER SUB-PROCURADOR GENERAL DE  
LA REPUBLICA ENCARGADO DEL DESPACHO

LIC. JULIO SANCHEZ VARGAS

El término de diez días designado para la vista de  
las partes, comienza el 15 OCT. 1967 y termina el  
16 OCT. 1967

Conste.

En 18 OCT. 1967 pasan estos autos al Ministerio  
Público, para que formule pedimento. - Conste.

En 16 NOV. 1967 devuelve estos autos al Ministerio  
Público, con el pedimento que se agrega. - Conste.



SEGUNDA

AL C.

10353

JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO.

Toca 7282/67

CHIHUAHUA, CHIH.

Exp. 230/67

Acuso a usted recibo de su atento oficio -  
número 6527 de fecha 31 de agosto último, con el que  
se recibieron de conformidad en esta Corte, los ane-  
xos que en el mismo se mencionan, relativos al jui-  
cio de amparo en revisión promovido por MARIA SOLANO  
DE RAMIREZ Y COAGS., contra actos del Congreso de  
ese Estado y otras autoridades.

Le reitero mi atenta consideración.

México, D.F., a 19 de septiembre de 1967.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS,

RAUL CUEVAS MAITECON

"megg"







En el toca al juicio de amparo en revisión pro

Depto.de Actua  
rios.

Amparo en re -  
visión.

Sala.....

Sección.....

Número.....

movido por

contra actos de usted

el C. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, con fecha

proveyó un acuerdo que en lo conducente dice:

"Se admite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, póngase los autos a la vista de las partes por diez días para que aleguen lo que a sus derechos convenga y transcurrido este plazo pase el asunto por igual término al Ministerio Público para que formule pedimento, y cumplido este requisito, turnense los autos al Pleno para su resolución."

Lo que notifico a usted como lo previene la Ley, suplicándole se sirva acusarme recibo.

Protesto a usted mi atenta consideración.

México, D. F., a de 19

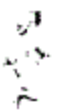
Actuario.

18242 Al C: *[illegible]*

18243 *[illegible]*

18244 *[illegible]*

18245 *[illegible]*





PROCURADURIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA

P R I N C I P A L.

México, D.F., Noviembre 3 de 1967.

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION  
P R E S E N T E .

000558

MARIA SOLANO DE RAMIREZ Y COAGRAVIADOS, promovieron \_  
amparo por violación a los artículos 14 y 16 Constitucio  
- nales ante el C. Juez Primero de Distrito en el Estado \_  
de Chihuahua en contra del Congreso de esa Entidad Fede-  
rativa, su Gobernador Constitucional, su Tesorero General  
y el recaudador de rentas de la Ciudad de Chihuahua, se-  
ñalando como actos reclamados: la expedición del Decreto  
No. 293 publicado en el Periódico Oficial del Estado el \_  
19 de Junio de 1967, estableciéndose un impuesto adicio-  
nal sobre todos los impuestos ordinarios, derechos y pro-  
ductos a que se refiere el artículo 2106 del Código Ad-  
ministrativo del Estado de Chihuahua, y cuyo rendimiento  
será destinado única y exclusivamente al sostenimiento \_  
de la Universidad de Chihuahua; la firma y promulgación \_  
de ese Decreto por parte del Gobernador de esa Entidad; \_  
el refrendo y actos de ejecución por parte del Tesorero \_  
General y el recaudador de rentas y los efectos y conse-  
cuencias derivados de esos actos.

El C. Juez del conocimiento, por sentencia de 15 de \_  
Agosto de 1967, sobreseyó el juicio de garantías promovi-  
do por los quejosos respecto al refrendo del Decreto No.  
293 que reclamaron del C. Tesorero General del Estado y \_  
les negó el amparo de la Justicia de la Unión.

Los Agraviados, por conducto de su representante co--

mún, por escrito de 22 de Agosto último interpusieron \_  
revisión, argumentando que el a quo violó en su perjuí  
cio el principio de legalidad garantizado por los ar---  
tículos 14 y 16 Constitucionales y también los artículos  
64 fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política \_  
del Estado de Chihuahua.

En opinión del suscrito, los agravios hechos valer \_  
son infundados, ya que la sentencia es legal y está debi  
damente motivada, porque es cierto, como lo dice el juz  
gador que los preceptos impugnados no gravan la educación  
universitaria, sino que el impuesto recae respecto de todos  
los contribuyentes por las diversas actividades que desarro  
llan y que han sido ya calificadas con anterioridad por el  
Estado, y únicamente adiciona los impuestos que con anterio  
ridad pagaban, con el 4% para destinarlo al sostenimiento \_  
de la Universidad de Chihuahua, que es un gasto público, \_  
estando en consonancia la fracción IV del artículo 31 de la  
Carta Fundamental de la República Mexicana, ya que la educa  
ción universitaria tiene ese carácter y está a cargo del Es  
tado, siendo falso que las consideraciones del juzgador sean  
incongruentes y contradictorias y también que grave la ins  
trucción universitaria, pues es cierto que para que tal cosa  
ocurriera sería preciso que el tributo recayera sobre las \_  
personas que concurren a la Universidad, aunque para el sos  
tenimiento de ésta deban de contribuir obligatoriamente los  
causantes; y por eso esta argumentación es ineficaz e impro  
cedente; y también es inoperante el segundo concepto de agr  
vios hecho valer, ya que la Legislatura Local si está facul  
tada legalmente para fijar los impuestos adicionales que juz  
gue convenientes, tal y como el presente, en uso de las fa--



PROCURADURIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA

P R I N C I P A L .

2 .

cultades que le confieren los artículos 64 fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y por último, también es infundado el último de los agravios hechos valer, y del que se solicita se revise, porque el del conocimiento aplicó debidamente la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Decreto reclamado no viola los requisitos de proporcionalidad y equidad, ya que lisa y llanamente aumenta en un 4% los previamente establecidos, en la proporción y medida de los impuestos que tengan que cubrir, y por tanto siendo infundados los agravios hechos valer, procede que ese Máximo Tribunal confirme el fallo recurrido.

Por lo expuesto, se solicita de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sirva CONFIRMAR el fallo recurrido.

A T E N T A M E N T E  
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUB. FED. AUX.

LIC. CARLOS MARTINEZ LUDERT.

*VrB?*

188





México, Distrito Federal, a

veintiuno de noviembre de mil novecientos -  
sesenta y siete.

7282/67

Pase este asunto para su estudio,

al C. Ministro **Huitrón** a quien le-

corresponde según el turno especial que para el--  
efecto se lleva en la Oficina General de Acuerdos.

Lo acordó y rubrica el C. Presiden

te. Doy fe.

emo.

1. 1900-1901

2. 1902-1903

3. 1904-1905

4. 1906-1907

5. 1908-1909

6. 1910-1911

7. 1912-1913

8. 1914-1915

9. 1916-1917

10. 1918-1919

11. 1920-1921



IGFA

7787/64

Forma C. y A.-1.

## ACUSE DE RECIBO

DE LA

OFICINA CENTRAL DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

No. de Registro I6430Su escrito número 230/67 Anexo.De fecha Sept. 29 de 1967Se turnó a GOBERNACION.Expediente 216.2/181371Chihuahua, Chih., a 9 de Nov. de 1967

ASUNTO:

AMPARO.

REMITE EXHORTO PROMOVIDO POR  
MARIA SOLANO DE RAMIREZ Y CONGR.

Consignatario:

DEFTO. DE ACTUARIOS.  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.  
MEXICO, D. F.

El Jefe de la Oficina

PARA POSTERIOR INFORMACION, FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE  
REGISTRO Y OFICINA A DONDE SE TURNO EL ASUNTO

jaao.

103632

SUPLENTE CORTE  
DE JUSTICIA DE LA  
NACION

Nov 13 11 17 AM '67

OFICINA DE  
CERTIFICACION  
JUDICIAL Y  
CORRESPONDENCIA

Por acuerdo de la Presidencia  
se agrego a su expediente.  
México, D.F. 4 OCT. 1968



PODER LEGISLATIVO

Secretaría

NUM. 271.-

I.G.E.

Forma No. 23-A

Chihuahua, Chih., noviembre 10 de 1967.

C. PRESIDENTE DE LA SUPREMA  
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.  
MEXICO, D.F.

Esta Cámara Legislativa en sesión de hoy, -  
quedó enterada de su atento oficio número 18242 fecha-  
do el 29 de septiembre Ppdo., relativo al juicio de --  
amparo número 7282/67, promovido por María Solano de -  
Ramírez y Coagraviados, contra actos de este Alto Cuer-  
po y otras autoridades.

Reiteramos a usted las seguridades de nues-  
tra atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION.

DIPUTADO SECRETARIO.

DIPUTADO SECRETARIO.

PROF. ROBERTO GONZALEZ LOYA.

PROF. FERNANDO BACHECO PARRA.

105010

SUPLENTE DE LA  
CORTE DE JUSTICIA DE LA

Nov 24 12 01 PM '67

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y  
FEDERACIÓN

xa.-

Por acuerdo de la Presidencia  
se agrega a su expediente.  
México, D. F.

4 OCT 1968



GOBIERNO DEL ESTADO

I.G.E.

Forma 57

Dependencia DEPARTAMENTO DE GOBERNACION  
Sección \_\_\_\_\_  
Núm. de Oficio 302-  
Expediente 216.2/181371.27485

ASUNTO: -ACUSE DE RECIBO.

Chihuahua, Chih., Noviembre 9 de 1967.

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.  
MEXICO, D. F.

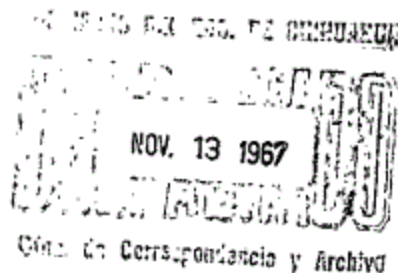
Por acuerdo del C. Gobernador Constitucional del Estado, acuso recibo de su atento oficio número 18243, de 29 de septiembre del año en curso y que se relaciona con el Juicio de Amparo número 230/67 promovido por MARIA SOLA NO DE RAMIREZ Y COAGRAVIADOS, contra actos del citado funcionario y de otras autoridades, en el que se comunica que por acuerdo de fecha 19 de septiembre citado, se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso.

Reitero a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION.

El Jefe del Departamento.

LIC. AUGUSTO MARTINEZ GIL.



coe.- 16430.



098628

SUPLENTE  
DE JUSTICIA DE LA  
NACION

Nov 18 11 43 AM '67

OFICINA DE  
CERTIFICACION  
JUDICIAL Y  
CORRESPONDENCIA

Por acuerdo de la Presidencia  
se agrega a su expediente.  
- México, D. F.

18 OCT. 1968



PODER EJECUTIVO

Tesorería General

Núm. IMP. DIV.

# 8172.-

JUICIO DE AMPARO.

a

I.G.E. *[Signature]*

# MEMORANDUM

Chihuahua, Chih., a 13 Noviembre de 1967.

C. PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACION.  
MEXICO, D. F. -

72841

Por su atento oficio fechado el 29 de septiembre de 1967, quedo enterado del acuerdo dictado por el C. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 19 de septiembre del año en curso, en el Toca el Juicio de Amparo Núm. 230/67 en revisión promovida por la C. MARIA SOLANO DE RAMIREZ Y COAGRAVIADOS.

*[Signature]*

A T E N T A M E N T E.  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.  
EL SUB-TESORERO DEL ESTADO.

HECTOR BOUCHEZ RIVERO.

JCR'ADV'fa.-

SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA  
NACION

434

Nov 17 11 54 AM '67

OFICINA DE  
CERTIFICACION  
JUDICIAL Y  
CORRESPONDENCIA

Por acuerdo de la Presidencia  
se agrega a su expediente.  
México, D. F. 1967



AMPRO EN REVISION No. 7282/67.  
MARIA SOLANO DE RAMIREZ Y COAGS.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO ABEL HUITRON

S I N T E S I S

Amparo en revisión promovido por María Solano - de Ramírez y coagraviados, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades, consistentes - esencialmente en la expedición, promulgación, publicación y ejecución del Decreto No. 293 publicado el diecisiete - de junio de mil novecientos sesenta y siete.

Los quejosos señalan como antecedentes que son - causantes de diversos impuestos y que el Decreto combati - do establece un impuesto adicional de 4% sobre todos los - impuestos ordinarios, para aplicar su rendimiento, única - y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de - Chihuahua.

En sus conceptos de violación señalan que dicho Decreto viola la fracción VII del artículo 3o. constitu - cional ya que si la educación que imparte el Estado es - gratuita, no puede afectarse a los causantes de impuestos con uno específicamente aplicado a la educación que impar - te el Estado.

Que el Congreso del Estado viola el artículo 74 fracción VI de la Constitución Política de la Entidad y - como consecuencia los artículos 14 y 16 constitucionales.

Igualmente se violan los principios de proporci - onalidad y equidad garantizados por el artículo 31, frac - ción IV, de la Constitución General de la República.

Que con sus actos el Tesorero General del Esta - do y el Recaudador de Rentas violan en su perjuicio la ga - rantía de legalidad consagrada en los artículos 14 y 16 - constitucionales.

Igualmente se violan los principios de propor - cionalidad y equidad garantizados por el artículo 31 frag

ción IV de la Constitución General de la República.

El Juez de Distrito sobreseyó el juicio respecto al refrendo que reclama del Tesorero General del Estado y negó el amparo respecto de las demás autoridades fundándose en que no se grava la educación universitaria, sino que el impuesto recae sobre todos los contribuyentes - adicionando los impuestos anteriores con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua siendo este un gasto público como lo requiere la fracción IV del artículo 31 constitucional.

Que no se viola la Constitución del Estado ya que el Congreso tiene facultades para legislar en todo lo concerniente al régimen interior de la entidad.

Igualmente señala que no se violan los principios de personalidad y equidad porque no se gravan los otros impuestos sino que únicamente se aumenta la tasa de los previamente establecidos en un 4%.

El proyecto consulta la confirmación de la sentencia en la parte que se revisa considerando que no se grava la educación, sino que el impuesto recae sobre todos los contribuyentes adicionándose únicamente en un 4% los impuestos preexistentes.

Respecto a que el impuesto se dedica única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad se considera que no se viola el artículo 31 de la fracción IV de la Carta Magna ya que el impuesto se destina al pago de un gasto público como es el sostenimiento de la Universidad del Estado, (se cita al respecto un precedente siguiendo



= 3 =

A. Rev. 7282/67.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

do el criterio de que no se viola el artículo 31 constitu  
cional en su fracción IV si se destina un impuesto desde  
su origen a la satisfacción de un gasto público).

Respecto del segundo agravio se considera que -  
los quejosos y recurrentes no probaron que se violara la-  
Constitución Federal por lo que se confirma la sentencia en  
la parte que se revisa y se niega el amparo.

En apoyo del proyecto se invoca un precedente -  
sentado por este Tribunal en Pleno, por unanimidad de 18-  
votos, al resolver un asunto jurídicamente similar en el-  
amparo en revisión número 7284/67, interpuesto por Antonio  
Leo G. y coagraviados.

1. The first part of the report is a general  
description of the project. It is a study of the  
effect of the new law on the business community.  
The study was conducted by a group of experts  
in the field. The results of the study are  
presented in the following sections.

2. The second part of the report is a detailed  
analysis of the data. It shows that the new law  
has had a significant impact on the business  
community. The data shows that the new law  
has led to a decrease in the number of  
businesses that are affected by the law.

3. The third part of the report is a discussion  
of the results. It shows that the new law  
has had a positive impact on the business  
community. The data shows that the new law  
has led to a decrease in the number of  
businesses that are affected by the law.

4. The fourth part of the report is a conclusion.  
It shows that the new law has had a positive  
impact on the business community. The data  
shows that the new law has led to a decrease  
in the number of businesses that are affected  
by the law.





AMPARO EN REVISION 7282/67.

MARIA SOLANO DE RAMIREZ Y coagraviados

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.OPINENCIA DEL SEÑOR MINISTRO ABEL HUITRON  
Secretario Genaro Góngora Pimentel.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal -  
Pleno, correspondiente al día

VISTOS ; y

RESULTANDO :

PRIMERO.- Por escrito presentado el tres de agosto de mil novecientos sesenta y siete, ante el Juez de Distrito en Chihuahua, María Solano de Ramírez, Marcelo Ramírez Rojas, Amalia Ochoa Molina, Ricardo Herives Herives, Teófilo Lucero M., Rafael Solano Majalca, Manuel Pérez Silva, Braulio Leyva Nevárez, Porfirio Nava Rojas, Guadalupe Calzadillas C. de Torres, Ramón Jigala Corral, José Mireles Lozano, María Luisa Olivas de Arévalo, José Prado Moreno, Natalia Borunda Granillo, Petra T. de Mireles, Moisés Carrasco Castillo, Antonio Sánchez Guadarrama, Fernando Rodríguez Antúnez, Emilia Chávez de Rodríguez, Matiana A. de Ornelas, Valentín García Carrillo, Jerónimo Campos Soto, Alberto Gutiérrez Moreno, Octavio Blanco Valladolid, Elena Mendoza Castillo, Pedro Ayala Solano, Josefina Solano Vda. de Marruffo, Pablo Hinojosa Mendoza, Francisco Hinojosa -- Mendoza, María Elena Flores Hinojosa, Ramón Gerardo Hinojosa, Porfirio Nava Rojas, Concepción Orozco, José Reyes Pineda Cervantes, Faustino Salazar Zamora, Florencio Ramírez Villalobos, Jesús Murillo Armenta, Emilio Castillo Maldonado, Máximo Ponce Carrillo, Esteban Villalobos, Enrique Noe Castillo Armenta, Fernando Heredia Cano, Ramón Paredes Ochoa, Emilio Quintana Chávez, José Carlos Estrada Estrada, Nicolás Villanueva O., Guadalupe Cadena Chacón, Marcelo Cadena Corral, Belizario Escárcega Ruiz, Jesús Escárcega Paniagua

y Guillermo Schwartz Mendoza, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado en Chihuahua, Gobernador de la misma Entidad, Tesorero General del Estado y Recaudador de Rentas de ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua; actos que hicieron consistir:

"Del H. Congreso del Estado, reclamamos la expedición del Decreto Núm. 293, que fue publicado en el PERIÓDICO OFICIAL del Estado el día 17 del mes de junio último y que ha entrado en vigor a partir del día primero del mes en curso, estableciendo un impuesto adicional SOBRE TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS, DERECHOS Y PRODUCTOS a que se refiere el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, y cuyo rendimiento será destinado Única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.- Del C. Gobernador del Estado, reclamamos la firma y promulgación del Decreto citado.- Del C. Tesorero General del Estado, reclamamos el refrendo y actos de ejecución del Decreto.- Del C. Recaudador de Rentas, los actos de su ejecución".

Señalan como garantías violadas las que consagran los artículos 3o., 14 y 16 de la Constitución Federal.

SEGUNDO.- Relatan los quejosos como antecedentes:

"1o.- Los suscritos somos cuasantes de impuestos al Estado que debemos pagar en la Recaudación de Rentas, como lo comprobamos con los anexos que acompañamos.- 2.- La Ley de Egresos del Estado de fecha 31 de diciembre de 1966, fija la distribución que deberá darse a los impuestos que deberán recaudarse durante el año de 1967; y en esa Ley se señala en su partida 217, fracciones 4 y 5, la suma de \$4.630.000, para la Universidad de Chihuahua, que este Organismo recibirá durante el año en curso.- 3o.- Pero en el



A. Rev. 7282/67.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

Núm. 48 del Periódico Oficial del Estado de fecha 17 de junio último, se publicó el decreto Núm. 293 expedido por el Congreso del Estado, estableciendo un impuesto adicional -- del 4% sobre todos los impuestos ordinarios, derechos y -- productos a que se refiere el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, para aplicar su rendimiento, única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. La vigencia de este decreto, es a partir del -- día primero del mes en curso,"

TERCERO.- Los quejosos formularon como conceptos de violación los siguientes:

"I.- El decreto impugnado, viola en nuestro agravio la Fracción VII del Artículo 3o. Constitucional que establece que la educación que imparta el Estado, será gratuita; en consecuencia, no puede afectarse a los causantes de impuestos, con alguno que específicamente deba aplicarse a la educación que el Estado imparta".

"Por tanto, el Congreso del Estado, al crear el Impuesto del 4% específicamente para destinarlo EXCLUSIVAMENTE al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, viola lo dispuesto por el Artículo 3o. de la Constitución Política Mexicana, en su fracción VII y viola en nuestro -- perjuicio la garantía de legalidad que nos conceden los artículos 14 y 16 Constitucionales".

"II.- El Congreso del Estado viola en nuestro -- agravio el Artículo 64, fracción VI de la Constitución Política del Estado, que dice literalmente: "Art. 64.- Son atribuciones del Congreso:... VI.- Fijar anualmente todos los gastos de la Administración Pública del Estado, previo examen del presupuesto que presente el Ejecutivo"; y viola en nuestro perjuicio el artículo 163 de la misma Constitu-

ción, que establece categóricamente: "Art. 163.- El año -- fiscal para el Estado y los Municipios, se contará del pri--  
mero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año".--  
Ahora bien, si el Congreso del Estado, mediante decreto --  
Núm. 216 de 31 de enero de 1966, fijó los gastos para el --  
año que cursa, al fijar nuevos gastos, sin tener faculta--  
des para ello y contraviniendo los sistemas procesales en--  
materia hacendaria, viola en nuestro agravio los artículos  
14 y 16 Constitucionales".

"III.- El Congreso del Estado, en el Decreto que  
se estudia, viola en nuestro agravio los principios de pro--  
porción y equidad, puesto que grava no PERCEPCIONES, sino--  
EROGACIONES, como son los impuestos gravados por el mismo--  
Decreto. No conocemos, hasta ahora, ley alguna que establez--  
ca que las erogaciones son sujetos de impuestos. Esto cons--  
tituye un rompimiento con la técnica de tributación, pues--  
todo impuesto nace de un bien o un servicio prestados por--  
el Estado y recibido por el causante; pero es absurdo que--  
un impuesto cause otro impuesto, o sea que una erogación--  
resulte gravable, como en el caso que nos ocupa. Por tanto  
el Decreto carece de equidad y viola el Artículo 31 frac--  
ción IV de la Constitución General de la República, siendo  
aplicable la tesis jurisprudencial que dice textualmente:-  
"Si bien el Artículo 31 Constitucional que establece los --  
requisitos de proporción y equidad del impuesto como dere--  
chos de un contribuyente, no está en el Capítulo relativo--  
a las garantías individuales, la lesión de ese derecho es--  
una violación de esas garantías. (Sem.Jud.de la Fed.Tomo --  
XX, Pág.930 y Tomo XXI, Págs.950 y 2035)."

"IV.- El Gobernador del Estado, al firmar y pro--  
mulgar el Decreto Núm. 984 que crea un impuesto SOBRE TODOS



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

LOS IMPUESTOS ORDINARIOS, DERECHOS Y PRODUCTOS, para aplicarlo única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, viola en nuestro perjuicio la garantía de legalidad que nos conceden los Artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que sus actos carecen de fundación y motivación."

"El C. Tesorero General del Estado, por las razones que se han dejado expuestas, al refrendar el decreto de que se trata, exigiéndonos obligaciones creadas por el mismo Decreto, viola en nuestro perjuicio la citada garantía de legalidad".

"VI.- Finalmente, el Recaudador de Rentas, al ordenar se exija el cumplimiento de las obligaciones nacidas de un Decreto que grava TODOS LOS IMPUESTOS Y DERECHOS, con un 4% destinado única y exclusivamente a la Universidad de Chihuahua, viola en nuestro perjuicio la garantía de legalidad que nos conceden los artículos 14 y 16 Constitucionales".

CUARTO.- El Juez de Distrito admitió la demanda por auto de cuatro de agosto de mil novecientos sesenta y siete y seguido el juicio por sus trámites legales dictó sentencia sobreseyendo el juicio respecto al refrendo del Decreto Núm. 293 que se reclama del C. Tesorero General del Estado; y, negando el amparo a los quejosos, contra actos que reclaman del H. Congreso del Estado, Gobernador Constitucional y Recaudador de Rentas, consistentes en la expedición, promulgación, aplicación y ejecución del mencionado Decreto.

La sentencia se apoya en las consideraciones que en seguida se transcriben:

"Los conceptos de violación son infundados. En -



efecto, el decreto impugnado adicionó los artículos 2106 y 2079 del Código Administrativo del Estado, para quedar como sigue: "2106.-- Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen normalmente para la atención del gasto público con este mismo carácter se establece un impuesto adicional de 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.-- Artículo 2079.-- A la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, de acuerdo con lo establecido en este Código y su Reglamento. Los ingresos que le corresponda percibir a la Universidad de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el artículo 2106, serán recaudados por las Oficinas Receptoras, simultáneamente con el entero de los impuestos ordinarios, cuyo rendimiento se concentrará directamente en la Tesorería General del Estado, quien lo entregará al Patronato de la Universidad de Chihuahua". De la simple lectura de los artículos transcritos se advierte que no es verdad lo que afirman los quejosos de que se establece un gravamen o retribución por la educación universitaria que imparte el Estado de Chihuahua, pues para poder coincidir en el evento que se menciona en los conceptos de violación, era necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir enseñanza o que gravara de cualquier forma la instrucción universitaria, lo que no sucede, sino que el decreto, al adicionar el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, establece un aumento del 4% en la tasa de los impuestos ordinarios, derechos y productos que percibe el Estado, para ser destinado al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Por -





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. que los preceptos impugnados no gravan la educación uni-

versitaria, sino que el impuesto recae sobre todos los con-  
tribuyentes por las distintas actividades que desarrollan-  
ya calificadas por el Estado y únicamente adiciona los im-  
puestos que anteriormente pagaban con el 4% para destinar-  
lo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, que es  
un gasto público, como lo requiere la Constitución en su -  
artículo 31 fracción IV, ya que es indudable que tiene es-  
te carácter la educación universitaria a cargo del Estado,  
de conformidad con lo que ordena el artículo 3o. de la Cons-  
titución Federal. El anterior criterio se basa en la Tesis  
Jurisprudencial número 28 publicada en las páginas 75 a 79  
de la Primera Parte del Apéndice del Semanario Judicial de  
la Federación editado en 1965. En estas condiciones el de-  
creto reclamado no es violatorio de los artículos 3o. frac-  
ción VII, 14 y 16 de la Constitución".

"En cuanto al segundo concepto de violación, tam-  
poco es fundado, ya que la expedición del decreto impugna-  
do, fue hecha por el Congreso del Estado en uso de las fa-  
cultades que le confieren los artículos 64 fracciones I y  
VI y 162 de la Constitución Política del Estado, que esta-  
blece, respectivamente, que son atribuciones del Congreso  
del Estado, legislar en todo lo concerniente al régimen in-  
terior del Estado, expidiendo cuantas leyes y demás dispo-  
siciones necesarias para su gobierno y administración, en-  
todos los ramos que uno y otra comprenden, fijar anualmente  
todos los gastos de la Administración pública y expedir las  
disposiciones hacendarias que establezcan las contribucio-  
nes necesarias para los gastos públicos y no podrá variar--  
los o modificarlas en vista del presupuesto de egresos. El-  
artículo 2106 del Código Administrativo del Estado establece

que son ingresos ordinarios aquellos que se obtienen normalmente para la atención de los gastos públicos; como el sostenimiento de la Universidad tiene ese carácter, es evidente que la Legislatura local está facultada legalmente para fijar el impuesto adicional de referencia. Por lo anterior se estima que los actos que se reclaman de la Legislatura local no violan los preceptos citados ni las garantías individuales consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal".

"El tercer concepto de violación es igualmente infundado. Los quejosos sostienen que el decreto en estudio viola los principios de proporción y equidad porque "grava no percepciones, sino erogaciones, como son los impuestos-gravados por el mismo decreto". No es verdad lo anterior porque el impuesto no grava los otros impuestos sino que únicamente aumenta la tasa de los previamente establecidos y como dicho aumento es del 4% para todos queda la misma proporción, pues los que pagaban cien pesos, pagarán ciento cuatro pesos y los que tenían impuestos por un mil pesos tendrán que pagar mil cuarenta pesos, o sea, que el aumento es proporcional y equitativo porque pone a todos los contribuyentes en la misma situación, por lo que no es violatorio del artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal. La Tesis de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita no es aplicable en la especie porque no apoya los conceptos de violación ni está relacionada con la cuestión planteada."

"Respecto de los actos que se hacen consistir en la expedición, promulgación, refrendo, aplicación y ejecución del decreto, solamente cabe agregar que no siendo inconstitucional el decreto por las consideraciones expuestas



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

Con anterioridad tampoco lo son dichos actos, porque no se impugnan por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender del contenido del decreto".

"Como consecuencia de todo lo anterior se estima que los actos reclamados no son violatorios de los artículos 3o., 14, 16 y 31 de la Constitución Federal por lo que corresponde negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan los quejosos".

QUINTO.- Inconformes los quejosos, por conducto de su abogado interpusieron el recurso de revisión, mismo que les fue admitido por el Presidente de esta Suprema Corte con fecha diecinueve de septiembre de mil novecientos sesenta y siete.

El Agente del Ministerio Público Federal designado para intervenir en este asunto pidió que se confirme la sentencia recurrida.

#### C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para conocer del presente recurso de revisión por interponerse contra sentencia dictada en un juicio de amparo en el que se controvierte la constitucionalidad de una ley, fracción IV bis inciso a) del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 84 fracción I inciso a) de la Ley de Amparo.

SEGUNDO.- En el escrito de revisión se expresan los siguientes agravios:

"1o.- El Juez "a quo", en el Cuarto Considerando de la sentencia recurrida, dice a la letra:

"Los anteriores conceptos de violación, son infundados. En efecto, el decreto impugnado adiciona los ar-

títulos 2106 y 2079 del Código Administrativo en el Estado, para quedar como sigue: "2106.- Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen normalmente para la atención del gasto público.- Con este mismo carácter se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este Artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Artículo 2079.- A la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, de acuerdo con lo establecido en este Código y su Reglamento.- Los ingresos que le corresponda percibir a la Universidad de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el Artículo 2106, serán recaudados por las Oficinas Receptoras, simultáneamente con el entero de los impuestos ordinarios, cuyo rendimiento se concentrará directamente en la Tesorería General del Estado, quien lo entregará al Patronato de la Universidad de Chihuahua". De la simple lectura de los artículos transcritos, se advierte que no es verdad lo que afirman los quejosos de que se establece un gravamen o retribución por la educación universitaria que imparte el Estado de Chihuahua, pues para poder coincidir con el evento que se menciona en los conceptos de violación, era necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir la enseñanza o que gravara de cualquier forma la instrucción universitaria, lo que no sucede, sino que el decreto, al adicionar el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, establece un aumento del 4% en la tasa de los impuestos ordinarios, derechos y productos que percibe el Estado, para ser destinado al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

- 11 -

A. Rev. 7282/67.

Por lo que los preceptos impugnados no gravan la educación universitaria, sino que el impuesto recae sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que desarrollan ya calificadas por el Estado y únicamente adiciona los impuestos que anteriormente pagaban, con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, que es un gasto público, como lo requiere la Constitución en su artículo 31 fracción IV, ya que es indudable que tiene ese carácter la educación universitaria a cargo del Estado, de conformidad con lo que ordena el Artículo 3o. de la Constitución Federal. El anterior criterio se basa en la Tesis Jurisprudencial número 28 publicada en las páginas 75 a 79 de la primera parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, editado en 1965. En estas condiciones el Decreto reclamado no es violatorio de los Artículos 3o. Fracción VII, 14 y 16 de la Constitución".

"Las anteriores consideraciones del "a quo", son incongruentes y contradictorias puesto que, sin que aparezca del Decreto impugnado ni una sombra, siquiera, de que el 4% que grava TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS Y DERECHOS para destinarlo UNICA Y EXCLUSIVAMENTE al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, sea un aumento de tasa, la sentencia recurrida así lo declara enfáticamente y afirma que ese aumento de tasa, como piadosamente lo denomina, no grava la instrucción universitaria, puesto que, para que tal cosa ocurriera, sería necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir la instrucción universitaria. Este argumento nos llevaría a la conclusión de que en los colegios de paga, la instrucción resulta gratuita, debido a que, como los alumnos, por su natural dependencia económica, no hacen -



los pagos de sus colegiaturas, la instrucción que reciben no es a título oneroso".

"Como queda demostrado, el impuesto impugnado ha sido creado con el exclusivo fin de sostener a la Universidad de Chihuahua, en su misión educadora, con detrimento de los causantes de dicho impuesto y en contravención del Artículo 3o. Constitucional que establece categóricamente que la instrucción que imparta el Estado debe ser gratuita. Por tanto éste debe ajustarse a sostener a la Universidad en la forma y términos que la Ley de Egresos del Estado en su Partida 217 fracciones IV y V señala, que destina para la Universidad la suma de \$4.630.000.00, sin que dicha partida pueda modificarse sino con cargo a los gastos públicos y de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria del Artículo 3o. Constitucional. Tal disposición legal establece, entre otras condiciones, la capacidad del presupuesto y no faculta al Estado para fijar impuesto alguno para el sostenimiento específico de los centros educativos superiores; en consecuencia, el Juez a quo, al no tomar en consideración lo establecido por el precepto Constitucional invocado, viola en agravio de los quejosos el principio de legalidad garantizado por los Artículos 14 y 16 constitucionales".

"II.- La sentencia recurrida establece que el segundo concepto de violación es infundado, pretendiendo que la expedición del Decreto impugnado fue expedido por el Congreso del Estado en uso de las facultades que le confieren los artículos 64 fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado. Tal apreciación es inexacta, porque si bien es cierto que la fracción I del Ar-





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

título 64 da facultades al Congreso para legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado, expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones sean necesarias para su Gobierno y administración, también es cierto que la fracción VI del mismo Artículo, solo faculta al Congreso para fijar anualmente todas las bases para la administración pública del Estado PREVIO EXAMEN DEL PRESUPUESTO que presente el Ejecutivo; el Artículo 162 invocado por el a quo, faculta al Congreso para expedir las disposiciones hacendarias que establezcan las contribuciones necesarias para los gastos públicos, en VISTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, el cual no está facultado para modificar; además deberá sujetarse a lo establecido por el Artículo 163 que establece que el año fiscal para el Estado y los Municipios se contará del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año. Por tanto las facultades del Congreso son limitadas, máxime cuando no fundó ni motivó el Decreto impugnado y establece un impuesto exclusivo, esto es: privativo, prohibido por la Constitución Política del Estado, como se ha demostrado anteriormente al establecer las restricciones establecidas en el artículo 162 de la misma, por la Constitución Federal; como se comprueba plenamente con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia definida:"

"De acuerdo con el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, para la validez constitucional de un impuesto, se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales: primero, que sea proporcional; segundo, que sea equitativo, y tercero que se destine al pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo estatuido por la

constitución, ya que ésta no concedió una facultad omnímoda para establecer las exacciones que a juicio del Estado, fueran convenientes, sino una facultad limitada por esos requisitos".

"Tomo LXV.- Arrigunaga Peón Manuel de pág. 2723- Tomo LXIX.-Cabezut Alberto M. y coags.-Pág. 398.-Tomo LXIX, Cabezut M.y Coags.pág. 5432.- Tomo LXXXIII, Bolaños García Fulgencio, pág. 813.-Tomo LXXV, Mora Manuel F., pág. 3603- (Copilación del Semanario Judicial de la Federación, Tomo-LXX, Pág. 1000)".

"Por tanto, al dar interpretación indebida a las disposiciones constitucionales que se han citado y al no acatar la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia, el Juez sentenciador falta a los más elementales principios de legalidad violándolos en nuestro agravio y en contravención de los Artículos 14 y 16 Constitucionales".

"III.- El Decreto impugnado de inconstitucionalidad, expresa con toda claridad y precisión: "Se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos..." No cabe, en consecuencia, ninguna interpretación gramatical ni lógica que no sea la que se expresa literalmente".

"Mucho menos cabe la interpretación arbitraria que pretende darle el Juez "a quo", en el sentido de que se trata de un aumento de tasa sobre los impuestos. Por tanto el decreto viola los mas elementales principios de tributación y jamás se ha dado el caso de que las erogaciones, como son los impuestos gravados, sean motivo de tributación".

"Así pues, queda claro que el Decreto de que se trata, grava erogaciones y no percepciones, por lo que es-



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

a todas luces ilegal, injusto y monstruoso."

"Por tanto viola los principios de justicia y legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, y el Juez al no tomar en consideración las razones y fundamentos en que basamos nuestra demanda de amparo, -- viola en nuestro agravio dichas garantías constitucionales".

TERCERO.- Debe declararse firme el primer punto-resolutivo de la sentencia recurrida, por no existir agravios al respecto.

CUARTO.- Son infundados los agravios hechos valer por los recurrentes.

El Juez de Distrito considera justificadamente -- que la fracción VII del artículo 3o. Constitucional se refiere a que la instrucción que imparta el Estado debe ser gratuita para los educandos. En efecto, la garantía que -- otorga el artículo en cuestión no puede referirse sino a -- que la instrucción que se imparta sea gratuita para las -- personas que concurren a recibirla, pero a fin de prestar otros servicios se requiere efectuar erogaciones que, en -- el caso del Estado tienen que provenir de los impuestos -- que pagan los individuos integrantes de la colectividad de que se trate. Ahora bien, resulta evidente que para hacer frente a los gastos señalados el Estado tiene completas fa -- cultades para fijar impuestos con la proporción exigida en la Constitución por lo que resulta improcedente tratar de -- negarle esa facultad, como pretenden hacerlo los quejosos.

QUINTO.- En la primera parte del segundo agravio, los recurrentes manifiestan que el Congreso del Estado ca -- rece de facultades para expedir el Decreto combatido en -- virtud de que modifica las disposiciones que autorizan al propio Congreso para fijar anualmente todas las bases para.

la administración pública del Estado, teniéndose además en cuenta que el año fiscal corre del primero de enero al -- treinta y uno de diciembre de cada año.

El agravio es infundado. El Juez de Distrito hizo el estudio del segundo concepto de violación, en el que los quejosos manifiestan que se viola en su perjuicio el -- artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Chi -- huahua, violándose con ello los artículos 14 y 16 de la -- Constitución Federal, pero sin señalar los quejosos en que consistían dichas violaciones a los artículos de la Consti -- tución Federal; a pesar de ello el Juez de Distrito en su -- sentencia consideró que no se violó la Constitución Local. El agravio respectivo, como se señaló anteriormente es in -- suficiente, porque en el mismo no se combaten adecuadamen -- te los argumentos del Juez y, porque al igual que el con -- cepto de violación relativo, tampoco señala en que consis -- ten las violaciones a la Constitución Federal.

El agravio, en su segunda parte, también es (in -- fundado. En el caso a estudio no se rindió ninguna prueba -- idónea que demostrara que el impuesto adicional del 4% sea desproporcionado e inequitativo y que por tal motivo viole el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

En cuanto a que se considera como privativo y -- dedicado para un fin especial como es el sostenimiento de -- la Universidad del Estado, en el caso es aplicable la te -- sis jurisprudencial número 17 del último apéndice de Juris -- prudencia que dice:

"LEYES PRIVATIVAS.- Es carácter constante de las leyes que sean de aplicación general y abstracta. (es de -- cir, que deben contener una disposición que no desaparezca despues de aplicarse a un caso previsto y determinado de -





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

antemano, sino que sobreviva a esta aplicación y se apli-- que sin consideración de especie o de personas a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas). Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 constitucional, y aún deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Estas leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad-- se refiere a las leyes de todas las especies, y en contra de la aplicación de las leyes privativas protege el ya expresado artículo 13 constitucional".

El Decreto impugnado, reúne estos requisitos, de igualdad y generalidad como puede constatarse de su sola lectura:

"Artículo 2106.- Los ingresos ordinarios son --- aquellos, que se obtienen normalmente para la atención del gasto público.

Con este mismo carácter se establece un impuesto adicional de 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua."

De la transcripción anterior se observa que el artículo en cuestión no carece de abstracción y generalidad no pudiendo por tanto considerarse que tenga el carácter de privativo.

En cuanto a la aseveración hecha por los recurrentes de que en el caso se trata de un impuesto destinado -- única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad--

de Chihuahua, también en esta parte es infundado el agravio, ya que el mismo no viola la fracción IV, del artículo 31 constitucional ni la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Fundamental establece: "Son obligaciones de los mexicanos:... IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".

Ahora bien, esa obligación tiene por objeto la satisfacción de los gastos públicos que el Estado debe cubrir en beneficio de la colectividad. Que con los impuestos deban cubrirse los gastos públicos no constituye una prohibición, para que el tributo, por ley del Congreso, se destine desde su origen a cubrir un gasto en especial, si es en beneficio de la colectividad y a ello está obligado el Estado. Si alguna prohibición contiene el precepto, no es otra que la de que el impuesto se destine a fines diferentes a los del gasto público, pero en el caso se destinó al sostenimiento de la Universidad del Estado, que es un gasto público.

En consecuencia es correcta la consideración que al respecto hace el Juez de Distrito en su sentencia al referirse a la fracción IV del artículo 31 constitucional, ya que mientras el impuesto se destine a un gasto público, se estará cumpliendo con el mandato constitucional de destinar el impuesto a gastos en beneficio de la colectividad.

Este criterio fue sustentado en el amparo en revisión 4431/56, promovido por la Sección de Técnicos y Manuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República, fallado el dieciséis de --





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACIÓN.

abril de mil novecientos setenta, por unanimidad de diecisiete votos de los Ministros: Alberto Orozco Romero, Carlos del Río Rodríguez, Mario G. Rebolledo, Alberto Jiménez Castro, Manuel Rivera Silva, Ezequiel Burguete Farrera, Abel Huitrón y A., Rafael Rojina Villegas, Enrique -- Martínez Ulloa, Jorge Iñárritu, Ernesto Solís López, Ramón Canedo Aldrete, María Cristina Salmorán de Tamayo, Manuel Yáñez Ruiz, Mariano Ramírez Vázquez, Pedro Guerrero-Martínez y Presidente Alfonso Guzmán Neyra.

SEXTO.- Es infundado el tercer agravio. El Juez de Distrito acertadamente razonó que con el Decreto impugnado no se gravan otros impuestos, sino que únicamente se aumenta la tasa de los existentes en un 4%. En efecto -- aunque de la simple lectura del artículo 2106 transcrito en el Considerando Quinto de esta ejecutoria parece que -- lo que se grava son los otros impuestos, de una interpretación armónica de los dos párrafos del citado artículo -- se desprende que se trata de un ingreso ordinario que se establece a manera de impuesto adicional, o sea que no se gravan los otros impuestos sino que los mismos son adicionados en un 4%, consistiendo por tanto simplemente en un aumento de los preexistentes, mas de ninguna manera constituye un impuesto sobre los demás impuestos, por lo que el hecho generador del crédito fiscal continúa siendo el de cada uno de los impuestos anteriores adicionándose únicamente con el 4%.

Igual criterio al sostenido en esta ejecutoria pronunció este Tribunal Pleno al resolver en el amparo en revisión 7284/67, interpuesto por Antonio Leo G. y coags. en sesión del 12 de enero de 1971, por unanimidad de 18 -- votos de los señores Ministros Guerrero, del Río, Rebolledo,

~~Jiménez Castro, Rivera Silva, Burguete, Huitrón, Rojina -  
Villegas, Saracho, Martínez Ulloa, Iñárritu, Cánedo, Sal-  
morán de Tamayo, Yáñez Ruiz, Guerrero Martínez, Mondragón,  
Aguilar Álvarez y Presidente Guzmán Neyra.~~

Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 103 fracción I, 107 fracción VIII inciso a) de la Constitución Federal; 84 fracción I inciso a) y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- Se declara firme el sobreseimiento respecto al acto reclamado del Tesorero General del Estado de Chihuahua, consistente en el refrendo del Decreto 293, expedido por el Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia en la parte que se revisa.

TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Solano de Ramírez y coagraviados, contra los actos del Congreso del Estado de Chihuahua, Gobernador de la misma entidad y Recaudador de Rentas del Estado, consistentes en la expedición, promulgación, aplicación y ejecución del Decreto mencionado en el punto anterior.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución-vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad archívese el toca.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

Amp.en Rev.

7282/967.

##nueve de febrero de mil novecientos setenta y uno, se dió cuenta con este asunto al Tribunal-Pleno. La Secretaría dió lectura a los puntos -resolutivos del proyecto formulado por el señor Ministro Huitrón, en el sentido de declarar fir-me el sobreseimiento respecto al acto reclamado del Tesorero General del Estado, confirmar la -sentencia en la parte que se revisa y negar el-amparo respecto de los demás actos y autorida--des.

Hizo uso de la palabra el señor Mi--  
nistro Guerrero López para sugerir que en el --  
presente negocio se tomen en cuenta las conside  
raciones que, para enriquecer el estudio de los  
agravios, se hicieron en el amparo en revisión-  
7285/967 promovido por Oscar Hernández N. y coa  
graviados fallado el dos del actual; sugerencia  
que aceptó el señor Ministro ponente. Con dicha  
adición por unanimidad de diecisiete votos se -  
aprobó el proyecto; y el C. Presidente en fun--  
ciones Mariano Ramírez Vázquez hizo la declara-  
toria respectiva.

No asistieron los CC. Presidente Guzmán Neyra por haber tenido que asistir a una ce-remonia oficial; los Ministros Rojina Villegas-y Azuela, previo aviso, y del Río por estar ha-ciendo uso de licencia.

lhs.



Amp.en Rev.Núm.7282/967.- Promovido por María Solano de Ramírez y coagraviados, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades.

ACUERDO PLENO del día 9 de febrero de 1971.

¿Se aprueban los puntos resolutivos del proyecto formulado por el señor Ministro Huitrón?

<u>SI.</u>		<u>NO.</u>
/	GUERRERO LOPEZ	
66	DEL RIO	No asistió (por estar haciendo uso de licencia)
/	REBOLLEDO	
/	JIMENEZ CASTRO	
/	RIVERA SILVA	
/	BURGUETE	
/	HUITRON	
	ROJINA VILLEGAS	No asistió.
/	SARACHO ALVAREZ	
/	MARTINEZ ULLOA	
/	INARRITU	
	AZUELA	No asistió.
/	SOLIS LOPEZ	
/	CANEDO	
/	SALMORAN DE TAMAYO	
/	YAÑEZ	
/	RAMIREZ VAZQUEZ	(Presidente en funciones)
/	GUERRERO MARTINEZ	
/	MONDRAGON GUERRA	
/	AGUILAR ALVAREZ	
	GUZMAN NEYRA	No asistió (por haber asistido a una ceremonia oficial)

Unanimidad de 17 votos.

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970





AMPARO EN REVISION 7282/67.  
MARIA SOLANO DE RAMIREZ Y COAGRAVIADOS

OPINION DEL SEÑOR MINISTRO ABEL HUITRON  
Secretario Genaro Góngora Pimentel.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno, correspondiente al día nueve de febrero de mil novecientos setenta y uno.

VISTOS; y

RESULTANDO: -

PRIMERO.- Por escrito presentado el tres de agosto de mil novecientos sesenta y siete, ante el Juez de Distrito en Chihuahua, María Solano de Ramírez, Marcelo Ramírez Rojas, Amalia Ochoa Molina, Ricardo Herives Herives, - Teófilo Lucero M., Rafael Solano Majalca, Manuel Pérez Silva, Braulio Leyva Nevarez, Porfirio Nava Rojas, Guadalupe Calzadillas C. de Torres, Ramón Sigala Corral, José Mireles Lozano, María Luisa Olivas de Arévalo, José Prado Moreno, Natalia Borunda Granillo, Petra T. de Mireles, Moisés Carrasco Castillo, Antonio Sánchez Guadarrama, Fernando Rodríguez Antúnez, Emilia Chávez de Rodríguez, Matiana A. de Ornelas, Valentín García Carrillo, Jerónimo Campos Soto, - Alberto Gutiérrez Moreno, Octavio Blanco Valladolid, Elena Mendoza Castillo, Pedro Avila Solano, Josefina Solano Vda. de Marruffo, Pablo Hinojosa Mendoza, Francisco Hinojosa-Mendoza, María Elena Flores Hinojosa, Ramón Gerardo Hinojosa, Porfirio Nava Rojas, Concepción Orozco, José Reyes Pineda Cervantes, Faustino Salazar Zamora, Florencio Ramírez Villalobos, Jesús Murillo Armenta, Emilio Castillo Maldonado, Máximo Ponce Carrillo, Esteban Villalobos, Enrique Noé Castillo Armenta, Fernando Heredia Cano, Ramón Paredes Ochoa Emilio Quintana Chávez, José Carlos Estrada Estrada, Nicolás Villanueva O., Guadalupe Cadena Chacón, Marcelo Cadena Corral, Belisario Escárcega Ruiz, Jesús Escárcega Paniagua

y Guillermo Shwartz Mendoza, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado en Chihuahua, Gobernador de la misma Entidad, Tesorero General del Estado y Recaudador de Rentas de ciudad - - Cuauhtémoc, Chihuahua; actos que se hicieron consistir:

"Del H. Congreso del Estado, reclamamos la expedición del Decreto Núm. 293, que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 17 del mes de junio último y que ha entrado en vigor a partir del día primero del mes en curso, estableciendo un impuesto adicional SOBRE TODOS-LOS IMPUESTOS ORDINARIOS, DERECHOS Y PRODUCTOS a que se refiere el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, y cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.- Del C. Gobernador del Estado, reclamamos la firma y promulgación del Decreto citado.- Del C. Tesorero General del Estado, reclamamos el refrendo y actos de ejecución del Decreto.- Del C. Recaudador de Rentas, los actos de su ejecución".

Señalan como garantías violadas las que consagran los artículos 3o., 14 y 16 de la Constitución Federal.

SÉGUNDO.- Relatan los quejosos como antecedentes:

"1o.- Los suscritos somos causantes de impuestos al Estado que debemos pagar en la Recaudación de Rentas, como lo comprobamos con los anexos que acompañamos.- 2.- La Ley de Egresos del Estado de fecha 31 de diciembre de 1966, fija la distribución que deberá darse a los impuestos que deberán recaudarse durante el año de 1967; y en esa Ley se señala en su partida 217, fracciones 4 y 5, la suma de \$4.630,000.00 para la Universidad de Chihuahua, que este Organismo recibirá durante el año en curso.- 3o.- Pero en el



número 48 del Periódico Oficial del Estado de fecha 17 de junio último, se publicó el decreto Núm. 293 expedido por el Congreso del Estado, estableciendo un impuesto adicional - del 4% sobre todos los impuestos ordinarios, derechos y productos a que se refiere el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, para aplicar su rendimiento, única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. La vigencia de este decreto, es a partir del día primero del mes en curso."

TERCERO.- Los quejosos formularon como conceptos de violación los siguientes:

"I.- El decreto impugnado, viola en nuestro agravio la Fracción VII del Artículo 3o. constitucional que establece que la educación que imparta el Estado, será gratuita; en consecuencia, no puede afectarse a los causantes de impuestos, con alguno que específicamente deba aplicarse a la educación que el Estado imparta".

"Por tanto, el Congreso del Estado, al crear el Impuesto del 4% específicamente para destinarlo EXCLUSIVAMENTE al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, viola lo dispuesto por el Artículo 3o. de la Constitución Política Mexicana, en su fracción VII y viola en nuestro perjuicio la garantía de legalidad que nos conceden los artículos 14 y 16 Constitucionales".

"II.- El Congreso del Estado viola en nuestro agravio el Artículo 64, fracción VI de la Constitución Política del Estado, que dice literalmente: "Art. 64.- Son atribuciones del Congreso: ... VI.- Fijar anualmente todos los gastos de la Administración Pública del Estado, previo examen del presupuesto que presente el Ejecutivo"; y viola en nuestro perjuicio el artículo 163 de la misma Constitu-

ción, que establece categóricamente: "Art. 163.- El año fiscal para el Estado y los Municipios, se contará del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año". Ahora bien, si el Congreso del Estado, mediante decreto -- Núm. 216 de 31 de enero de 1966, fijó los gastos para el año que cursa, al fijar nuevos gastos, sin tener facultades para ello y contraviniendo los sistemas procesales en materia hacendaria viola en nuestro agravio los artículos 14 y 16 Constitucionales".

"III.- El Congreso del Estado, en el Decreto que se estudia, viola en nuestro agravio los principios de proporción y equidad, puesto que grava no PERCEPCIONES, sino- EROGACIONES, como son los impuestos gravados por el mismo Decreto. No conocemos, hasta ahora, ley alguna que establezca que las erogaciones son sujetos de impuestos. Esto constituye un rompimiento con la técnica de tributación, pues todo impuesto nace de un bien o un servicio prestados por el Estado y recibido por el causante; pero es absurdo que un impuesto cause otro impuesto, o sea que una erogación resulte gravable, como en el caso que nos ocupa. Por tanto el Decreto carece de equidad y viola el Artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República, siendo aplicable la tesis jurisprudencial que dice textualmente: "Si bien el Artículo 31 Constitucional que establece los requisitos de proporción y equidad del impuesto como derechos de un contribuyente, no está en el Capítulo relativo a las garantías individuales, la lesión de ese derecho es una violación de esas garantías. (Sem.Jud.de la Fed. Tomo XX, Pág. 930 y Tomo XXI, Págs. 950 y 2035)."

"IV.- El Gobernador del Estado, al firmar y promulgar el Decreto Núm. 984 que crea un impuesto SOBRE TODOS





A. Rev. 10042/68.

LOS IMPUESTOS ORDINARIOS, DERECHOS Y PRODUCTOS, para aplicarlo única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, viola en nuestro perjuicio la garantía de legalidad que nos conceden los Artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que sus actos carecen de fundación y motivación."

"El C. Tesorero General del Estado, por las razones que se han dejado expuestas, al refrendar el decreto de que se trata, exigiéndonos obligaciones creadas por el mismo Decreto, viola en nuestro perjuicio la citada garantía de legalidad."

"VI.- Finalmente, el Recaudador de Rentas, al ordenar se exija el cumplimiento de las obligaciones nacidas de un Decreto que grava TODOS LOS IMPUESTOS Y DERECHOS, con un 4% destinado única y exclusivamente a la Universidad de Chihuahua, viola en nuestro perjuicio la garantía de legalidad que nos conceden los artículos 14 y 16 Constitucionales."

"CUARTO.- El Juez de Distrito admitió la demanda por auto de cuatro de agosto de mil novecientos sesenta y siete y seguido el juicio por sus trámites legales dictó sentencia sobreseyendo el juicio respecto al refrendo del Decreto Num. 293 que se reclama del C. Tesorero General del Estado; y, negando el amparo a los quejosos, contra actos que reclaman del H. Congreso del Estado, Gobernador -- Constitucional y Recaudador de Rentas, consistentes en la expedición, promulgación, aplicación y ejecución del mencionado Decreto."

La sentencia se apoya en las consideraciones que en seguida se transcriben:

"Los conceptos de violación son infundados. En-

efecto, el decreto impugnado adicionó los artículos 2106 y 2079 del Código Administrativo del Estado, para quedar como sigue: "2106.- Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen normalmente para la atención del gasto público con este mismo carácter se establece un impuesto adicional de 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a -- que se refiere este artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.- Artículo 2079.- A la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, de acuerdo con lo establecido en este Código y su Reglamento. Los ingresos que le corresponda percibir a la Universidad de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el artículo 2106, serán recaudados por las Oficinas Receptoras, simultáneamente con el enterero de los impuestos ordinarios, cuyo rendimiento se concentrará directamente en la Tesorería General del Estado, quien lo entregará al Patronato de la Universidad de Chihuahua." De la simple lectura de los artículos transcritos se advierte que no es verdad lo que afirman los quejosos de que se establece un gravamen o retribución por la educación universitaria que imparte el Estado de Chihuahua, pues para poder coincidir en el evento que se menciona en los conceptos de violación, era necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad y recibir enseñanza o que gravara de cualquier forma la instrucción universitaria, lo que no sucede, sino que el decreto, al adicionar el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, establece un aumento del 4% en la tasa de los impuestos ordinarios, derechos y productos que percibe el Estado, para ser destinado al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Por





lo que los preceptos impugnados no gravan la educación universitaria, sino que el impuesto recae sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que desarrollan ya calificadas por el Estado y únicamente adiciona los impuestos que anteriormente pagaban con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, que es un gasto público, como lo requiere la Constitución en su artículo 31 fracción IV, ya que es indudable que tiene este carácter la educación universitaria a cargo del Estado, de conformidad con lo que ordena el artículo 3o. de la Constitución Federal. El anterior criterio se basa en la Tesis Jurisprudencial número 28 publicada en las páginas 75 a 79 de la Primera Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación editado en 1965. En estas condiciones el decreto reclamado no es violatorio de los artículos 3o. fracción VII, 14 y 16 de la Constitución".

"En cuanto al segundo concepto de violación, tampoco es fundado, ya que la expedición del decreto impugnado, fue hecha por el Congreso del Estado en uso de las facultades que le confieren los artículos 64 fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado, que establece, respectivamente, que son atribuciones del Congreso del Estado, legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado, expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones necesarias para su gobierno y administración, en todos los ramos que uno y otra comprenden, fijar anualmente todos los gastos de la Administración pública y expedir las disposiciones hacendarias que establezcan las contribuciones necesarias para los gastos públicos y no podrá variar los o modificarlas en vista del presupuesto de egresos. El artículo 2106 del Código Administrativo del Estado establece

que son ingresos ordinarios aquellos que se obtienen normalmente para la atención de los gastos públicos; como el sostenimiento de la Universidad tiene ese carácter, es evidente que la Legislatura local está facultada legalmente para fijar el impuesto adicional de referencia. Por lo anterior se estima que los actos que se reclaman de la Legislatura local no violan los preceptos citados ni las garantías individuales consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal".

"El tercer concepto de violación es igualmente infundado. Los quejosos sostienen que el decreto en estudio viola los principios de proporción y equidad porque "grava no percepciones, sino erogaciones, como son los impuestos gravados por el mismo decreto". No es verdad lo anterior porque el impuesto no grava los otros impuestos sino que únicamente aumenta la tasa de los previamente establecidos y como dicho aumento es del 4% para todos queda la misma proporción, pues los que pagaban cien pesos, pagarán ciento cuatro pesos y los que tenían impuestos por un mil pesos tendrán que pagar mil cuarenta pesos, o sea, que el aumento es proporcional y equitativo porque pone a todos los contribuyentes en la misma situación, por lo que no es violatorio del artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal. La Tesis de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita no es aplicable en la especie porque no apoya los conceptos de violación ni está relacionada con la cuestión planteada,"

"Respecto de los actos que se hacen consistir en la expedición, promulgación, refrendo, aplicación y ejecución del decreto, solamente cabe agregar que no siendo inconstitucional el decreto por las consideraciones expuestas

A. Rev. 7282/67.



con anterioridad tampoco lo son dichos actos, porque no se impugnan por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender del contenido del decreto,"

"Como consecuencia de todo lo anterior se estima que los actos reclamados no son violatorios de los artículos 30., 14, 16 y 31 de la Constitución Federal por lo que corresponde negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan los quejosos."

QUINTO.- Inconformes los quejosos, por conducto de su abogado interpusieron el recurso de revisión, mismo que les fue admitido por el Presidente de esta Suprema Corte con fecha diecinueve de septiembre de mil novecientos sesenta y siete.

El Agente del Ministerio Público Federal designado para intervenir en este asunto pidió que se confirme la sentencia recurrida.

#### CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para conocer del presente recurso de revisión por interponerse contra sentencia dictada en un juicio de amparo en el que se controvierte la constitucionalidad de una ley, fracción IV bis inciso a) del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 84 fracción I inciso a) de la Ley de Amparo.

SEGUNDO.- En el escrito de revisión se expresan los siguientes agravios:

"1o.- El Juez "a quo", en el Cuarto Considerando de la sentencia recurrida, dice a la letra:

"Los anteriores conceptos de violación, son infundados. En efecto, el decreto impugnado adiciona los ar

A. Rev. 7282/67.

tículos 2106 y 2079 del Código Administrativo en el Estado, para quedar como sigue: "2106.- Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen normalmente para la atención del gasto público.- Con este mismo carácter se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este Artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Artículo 2079.- A la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, de acuerdo con lo establecido en este Código y su Reglamento.- Los ingresos que le corresponda percibir a la Universidad de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el Artículo. -- 2106, serán recaudados por las Oficinas Receptoras, simultáneamente con el entero de los impuestos ordinarios cuyo rendimiento se concentrará directamente en la Tesorería General del Estado, quien lo entregará al Patronato de la Universidad de Chihuahua". De la simple lectura de los artículos transcritos, se advierte que no es verdad lo que afirman los quejosos de que se establece un gravamen o retribución por la educación universitaria que imparte el Estado de Chihuahua, pues para poder coincidir con el evento que se menciona en los conceptos de violación, era necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir la enseñanza o que gravara de cualquier forma la instrucción universitaria, lo que no sucede, sino que el decreto, al adicionar el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, establece un aumento del 4% en la tasa de los impuestos ordinarios, derechos y productos que percibe el Estado, para ser destinado al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.





Por lo que los preceptos impugnados no gravan la educación universitaria, sino que el impuesto recae sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que desarrollan ya calificadas por el Estado y únicamente adiciona los impuestos que anteriormente pagaban, con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, que es un gasto público, como lo requiere la Constitución en su artículo 31 fracción IV, ya que es indudable que tiene ese carácter la educación universitaria a cargo del Estado, de conformidad con lo que ordena el artículo 30. de la Constitución Federal. El anterior criterio se basa en la Tesis Jurisprudencial número 28 publicada en las páginas 75 a 79 de la primera parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, editado en 1965. En estas condiciones el Decreto reclamado no es violatorio de los Artículos 30. Fracción VII, 14 y 16 de la Constitución".

"Las anteriores consideraciones del "a quo", son incongruentes, y contradictorias puesto que, sin que aparezca del Decreto impugnado ni una sombra, siquiera, de que el 4% que grava TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS Y DERECHOS para destinarlo ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, sea un aumento de tasa, la sentencia recurrida así lo declara enfáticamente y afirma que ese aumento de tasa, como piadosamente lo denomina, no grava la instrucción universitaria, puesto que, para que tal cosa ocurriera, sería necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir la instrucción universitaria. Este argumento nos llevaría a la conclusión de que en los colegios de paga, la instrucción resulta gratuita, debido a que, como los alumnos, por su natural dependencia económica, no hacen

los pagos de sus colegiaturas, la instrucción que reciben-  
-del... a título oneroso".

"Como queda demostrado, el impuesto impugnado ha  
sido creado con el exclusivo fin de sostener a la Univer-  
sidad de Chihuahua, en su misión educadora, con detri-  
mento de los causantes de dicho impuesto y en contraven-  
ción del Artículo 3o. Constitucional que establece categó-  
ricamente que la instrucción que imparta el Estado debe-  
ser gratuita. Por tanto éste debe ajustarse a sostener a

la Universidad en la forma y términos que la Ley de Egre-  
sos del Estado en su Partida 217 fracciones IV y V señala,  
que destina para la Universidad la suma de \$4,630.000.00,-  
sin que dicha partida pueda modificarse sino con cargo a  
los gastos públicos y de acuerdo con el artículo 23 de la  
Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria del  
Artículo 3o. Constitucional. Tal disposición legal esta-  
blece, entre otras condiciones, la capacidad del presu-  
puesto y no faculta al Estado para fijar impuesto alguno-  
para el sostenimiento específico de los centros educati-  
vos superiores; en consecuencia, el Juez a quo, al no to-  
mar en consideración lo establecido por el precepto Cons-  
titucional invocado, viola en agravio de los quejosos el  
principio de legalidad garantizado por los Artículos 14 y  
16 constitucionales".

"II.- La sentencia recurrida establece que el-  
segundo concepto de violación es infundado, pretendiendo-  
que la expedición del Decreto impugnado fue expedido por-  
el Congreso del Estado en uso de las facultades que le -  
confieren los artículos 64 fracciones I y VI y 162 de la  
Constitución Política del Estado. Tal apreciación es ine-  
xacta, porque si bien es cierto que la fracción I del Ar-





A. Rev. 7282/67.

Artículo 64 de facultades al Congreso para legislar en todo lo concerniente el régimen interior del Estado, expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones sean necesarias para su Gobierno y administración, también es cierto que la fracción VI del mismo Artículo, solo faculta al Congreso para fijar anualmente todas las bases para la administración pública del Estado PREVIO EXAMEN DEL PRESUPUESTO que presente el Ejecutivo; el Artículo 162 invocado por el a quo, faculta al Congreso para expedir las disposiciones hacendarias que establezcan las contribuciones necesarias para los gastos públicos, en VISTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, el cual no está facultado para modificar; además deberá sujetarse a lo establecido por el Artículo 163 que establece que el año fiscal para el Estado y los Municipios se contará del 1o. de enero al 31 de diciembre de cada año. Por tanto las facultades del Congreso son limitadas, máxime cuando no fundó ni motivó el Decreto impugnado y establece un impuesto exclusivo, esto es: privativo, prohibido por la Constitución Política del Estado, como se ha demostrado anteriormente al establecer las restricciones establecidas en el artículo 162 de la misma, por la Constitución Federal como se comprueba plenamente con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia definida:"

"De acuerdo con el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, para la validez constitucional de un impuesto, se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales: primero, que sea proporcional; segundo, que sea equitativo, y tercero que se destine al pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo estatuido por la

constitución, ya que ésta no concedió una facultad omnímoda para establecer las exacciones que a juicio del Estado, fueran convenientes, sino una facultad limitada por esos requisitos."

"Tomo LXV.- Arrigunaga Peón Manuel de pág. 2723-Tomo LXIX.-Cabezut Alberto M. y coags.-Pág. 398.-Tomo LXIX, Cabezut M. y Coags. pág. 5432.-Tomo LXXXIII, Bolaños García-Fulgencio, pág. 813.-Tomo LXXV, Mora Manuel F., pág. 3603-(Copilación del Semanario Judicial de la Federación, Tomo-LXX, Pág. 1000)."

"Por tanto, al dar interpretación indebida a las disposiciones constitucionales que se han citado y al no acatar la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia, el Juez sentenciador falta a los más elementales principios de legalidad violándolos en nuestro agravio y en contravención de los Artículos 14 y 16 Constitucionales."

"III.- El Decreto impugnado de inconstitucionalidad, expresa con toda claridad y precisión: "Se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos..." No cabe, en consecuencia, ninguna interpretación gramatical ni lógica que no sea la que se expresa literalmente."

"Mucho menos cabe la interpretación arbitraria que pretende darle el Juez "a quo", en el sentido de que se trata de un aumento de tasa sobre los impuestos. Por tanto el decreto viola los mas elementales principios de tributación y jamás se ha dado el caso de que las erogaciones, como son los impuestos gravados, sean motivo de tributación."

Así pues, queda claro que el Decreto de que se trata, grava erogaciones y no percepciones, por lo que es-



A. Rev. 7282/67.

a todas luces ilegal, injusto y monstruoso."

"Por tanto viola los principios de justicia y legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, y el Juez al no tomar en consideración las razones y fundamentos en que basamos nuestra demanda de amparo, viola en nuestro agravio dichas garantías constitucionales".

TERCERO.- Debe declararse firme el primer punto-resolutivo de la sentencia recurrida, por no existir agravios al respecto.

CUARTO.- Es infundado el primero de los agravios que los recurrentes hacen valer. En este agravio se sostiene substancialmente, en su primera parte, que las consideraciones del Juez de Distrito son incongruentes y contradictorias, porque sin que aparezca en el decreto que se reclama que el impuesto adicional sea un aumento en la tasa de los impuestos ya establecidos, el juzgador lo declara en forma enfática en su sentencia, afirmando además que no grava la instrucción universitaria, cuando está plenamente demostrado que el tributo en cuestión está destinado al sostenimiento de la Universidad en su misión educadora y que por tal motivo se contraviene el artículo 3o. de la Constitución Federal en que se dispone que la educación que imparta el Estado será gratuita.

No existe la contradicción que se atribuye al Juez de Distrito en los argumentos que fundan lo que aparece como primer considerando de su sentencia. Los quejosos en el primer concepto de violación que hacen valer en su demanda, sostienen en esencia que el decreto que impugnan es violatorio de la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal que establece que la educación que imparta el Estado será gratuita; que por lo tanto, no pueden

establecerse impuestos como el que se reclama, destinados al sostenimiento de la Universidad del Estado de Chihuahua, sin violar dicho precepto constitucional. El Juez a quo, al analizar este concepto de violación, lo estima infundado, considerando que conforme al artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, que crea el impuesto de 4%, no se está gravando en forma alguna la instrucción universitaria, pues el tributo no recae sobre los que acuden a la universidad para recibir instrucción, sino sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que realicen, ya calificadas por el Estado y a quienes se les adicionen los impuestos que ya pagaban con el de nueva creación para el sostenimiento de la Universidad, que es un gasto público al que debe contribuir el particular. En la consideración que se resume, no puede haber ni hay contradicción -- porque, en efecto, el impuesto que se combate no es un impuesto por recibir educación; consecuentemente, no se contraviene el mandato constitucional de que la educación se imparte en forma gratuita por el Estado. El precepto que lo establece lo considera, según los términos del artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, como un ingreso ordinario que se destina a la atención del gasto público, y lo adiciona a los impuestos ordinarios y derechos con -- que tributan los diversos causantes en las actividades que, como dice el Juez de Distrito, ya fueron calificadas por la Hacienda Local. Se trata de una contribución al gasto público que va a satisfacer las necesidades de la colectividad para un fin específico como es la educación que el Estado otorga a la juventud, para el desarrollo cultural, social y económico de la propia entidad y por ende, de la Nación Mexicana.





Ahora bien, si se trata de un gasto publico que ~~de~~ be satisfacerse con la contribución de todos los habitantes de Chihuahua, el hecho de que el Estado fije en una ley un tributo, para sostener dicho gasto publico, no implica, por la circunstancia de que se precise cual va a ser el destino de ese tributo, que se está cobrando la educación, y en este caso resulta acertada la consideración del Juez de Distrito que, para que tal ~~va~~ sucediera, se requeriría que ese tributo recayera sobre el educando ya que entonces sí se haría nugatorio el mandato constitucional de impartir gratuitamente la enseñanza.

En su segunda parte el agravio se refiere a que el Estado debe sujetarse a la ~~partida~~ 217 fracción IV y V de la Ley de Egresos del propio Estado, que destina para la Universidad \$4,630,000.00 anuales, sin que dicha ~~partida~~ pueda modificarse sino con cargos a los gastos publicos y de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Organica de la Educación Pública, reglamentaria del artículo 30. --- constitucional. ~~que~~ esta disposición legal no faculta al Estado para fijar impuesto alguno para el sostenimiento específico de los educativos superiores. Como se ve en esta segunda parte del agravio se vuelve a impugnar el decreto número 293 por las mismas causas ya invocadas, o sea la pretendida oposición a los mandatos del artículo 30. constitucional y se recurre a un concepto de ilegalidad al citar el artículo 23 de la Ley Organica de la Educación Pública, sin parar mientes en que, según lo dispuesto en el artículo 20. de la propia Ley, este Ordenamiento no se aplica a las universidades dependientes de las entidades federativas, amén de que el citado artículo 23

no prohíbe la existencia de un impuesto adicional como el mencionado. El carácter de exclusividad del referido impuesto adicional del 4% solo menciona como un calificativo al mismo, sin que sea propiamente objeto del agravio.

Por lo demás, la ley que se combate en este amparo, adiciona, en efecto, los impuestos en general cuyas bases y tarifas están determinadas por las leyes en particular y las aumenta en un 4% sin que haya precepto constitucional que se lo impida, porque frente a la obligación del particular de contribuir al gasto público, -- está la facultad del Estado de imponer las contribuciones necesarias para satisfacer los gastos públicos y si como se dejó establecido, el impuesto adicional no tiene el carácter de un impuesto a la educación porque no gravita sobre los educandos, es evidente que el Estado, frente a las necesidades y fines que constituyen su esencia puede establecer un impuesto para testinarlo a un gasto público especial.

*Arz. 138*

En consecuencia, la sentencia del Juez de Distrito se ajusta a la realidad tributaria y a los principios constitucionales que en el caso no se contravienen.

QUINTO.-- El segundo agravio también resulta infundado por las siguientes razones.

Los recurrentes afirman que es inexacta la apreciación hecha por el Juez de Distrito, al declarar infundado el segundo concepto de violación, al considerar en su sentencia que el "Congreso del Estado expidió el Decreto que se impugna en uso de las facultades que le conferieren los artículos 64 fracciones I y VI y 162 de la -- Constitución Política del Estado"; alegando dichos recu-





rrentes, que si bien es cierto que el referido artículo-64 faculta al Congreso para legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado; también lo es que la fracción VI del propio artículo solo lo faculta para fijar anualmente las bases para la administración pública, previo examen del presupuesto que presente el Ejecutivo; por lo que consideran los recurrentes que con ello se viola el mencionado artículo 162 y en consecuencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pero sin señalar en que consisten dichas violaciones P Pacto Federal.

El agravio es infundado ya que sus argumentos no son operantes para modificar las consideraciones del juzgador, en virtud de que los recurrentes confunden en sus alegaciones el acto de expedir E leyes fiscales, (o de cualquier otra índole), que se estimen necesarias para el régimen interior del Estado, con la facultad de aprobar el presupuesto de egresos; facultad que no puede constituir un obstáculo para que el Congreso legisle, expida las leyes que considere necesarias; no quedando por lo tanto limitada su facultad legislativa, ni debiendo entremezclarse o confundirse un acto con otro.

Por lo anterior el Juez de Distrito obró correctamente al considerar en su sentencia que no existen violaciones a la Constitución Local, pues como quedó demostrado el Congreso del Estado de Chihuahua tiene facultades para legislar en todo lo que concierne al régimen interior del Estado, con la salvedad de aquellas materias reservadas por la Constitución Federal para el Congreso de la Unión, no comprendiéndose en estas las referidas a impuestos para fines educativos, ni la modificación de --

los presupuestos de egresos estatales.

De acuerdo con dicha facultad la Legislatura del Estado expidió el Decreto que se reclama, mismo que como se demostró no es violatorio de los artículos 3o., 14 y 16 de la Carta Fundamental, y si la creación de ese impuesto modifica el Presupuesto de Egresos expedido para el año de 1966, tal modificación no convierte a la Ley en inconstitucional, toda vez que fue expedida por el órgano constitucionalmente autorizado. Podrá ser antitécnico que se modifique el Presupuesto durante el año de 1966; pero no es inconstitucional, ya que no se puede sostener validamente como pretenden hacerlo los recurrentes, que la aprobación del Presupuesto de Egresos para un año determinado sea un impedimento para que el Congreso legisle en materia de impuestos. Tal presupuesto de Egresos no puede tener, en materia de gastos, la rigidez que se pretende en el agravio que se estudia, pues siendo los fines del Estado resolver todos los problemas que afectan a la administración pública y a la colectividad no se le puede limitar para que por conducto del órgano respectivo dicte todas las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de esos fines.

El agravio, en su segunda parte, también es infundado, en cuanto sostienen los recurrentes que el impuesto es desproporcionado e inequitativo y que por tal motivo viola el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal.

En el caso a estudio la capacidad contributiva de los causantes quejosos está en relación con la de los demás causantes, lo cual se aprecia de la lectura de la Ley reclamada; existiendo una perfecta distribución de la

239



carga fiscal entre todos los causantes que se encuentran en los mismos presupuestos de la norma en estudio; ya que la aplicación a todos los causantes con una tasa igual del 4% en relación a los impuestos que proporcionalmente ya les han fsido fijados por otros conceptos, lo que demuestra, -- que no tiene las características de inconstitucionalidad -- que se le pretende imputar. En cuanto a que se considere -- como privativo por dedicarse a un fin especial como es el sostenimiento de la Universidad del Estado, debe decirse -- que aplicando la tesis jurisprudencial número 17 del último Apéndice de Jurisprudencia, no tiene tal carácter de -- --Ley privativa. La tesis de referencia sostiene lo siguiente: "LEYES PRIVATIVAS.- Es carácter constante de las -- leyes que sean de aplicación general y abstracta, (es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de -- antemano, sino que sobreviva a ésta aplicación y se apli-- que sin consideración de especie o de personas a todos los casos idénticos -- que previenen, en tanto no sean abrogadas). Una Ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13- constitucional, y aún deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Estas Leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como -- en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad -- se refiere a las leyes de todas las especies, y en contra de la aplicación de las leyes privativas protege el ya expresado artículo 13 constitucional.".

El Decreto impugnado, reúne estos requisitos, de generalidad e igualdad, como puede constatarse de su sola lectura:

"Artículo 2106.- Los ingresos ordinarios son aquellos, que se obtienen normalmente para la atención del gasto público."

"Con este mismo carácter se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y de rechos a que se refiera este artículo cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua."

De la transcripción anterior se observa que el artículo en cuestión no carece de abstracción y generalidad, no pudiendo por tanto considerarse que tenga el carácter de privativo.

SEXTO.- En el tercer agravio sostienen los recurrentes que en la redacción del decreto impugnado en la parte que dice: "Se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos..." no cabe ninguna interpretación gramatical ni lógica que no sea la que se expresa literalmente pues sostienen que el impuesto se fija sobre otros impuestos. El agravio es infundado puesto que como acertadamente lo hace notar el Jefe de Distrito con el decreto impugnado no se gravan otros impuestos, ya que si así fuera quien debería pagarlos serían el Estado, sin que sufrieran perjuicio alguno los recurrentes. Las leyes deben interpretarse fundadamente según su espíritu y no apegarse a la letra pues si de la simple lectura del artículo 2106, transcrito en el considerando quinto de esta ejecutoria, pudiera suponerse que se gravan otros impuestos, con una interpretación armónica de los dos párrafos del citado artículo y con un simple razonamiento de sentido común, se desprende que se trata de un

241





ingreso ordinario que se establece como impuesto adicional, sea que no se gravan los otros impuestos, sino que los mismos se adicionan en un 4%, consistiendo por tanto en un aumento simple a los pre-existentes y de ninguna manera en un impuesto sobre todos los demás impuestos, por lo que el hecho generador del crédito fiscal es el mismo ya establecido en cada uno de los impuestos anteriores, adicionando únicamente con el 4%.

✓ SEPTIMO.- Conviene insistir en que solo por lo que ve al carácter que atribuyen los recurrentes en su primer agravio al impuesto de ser contrario al artículo 30. Constitucional se alega en el aspecto exclusivo que contiene al destinarlo expresamente para el sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.

Doctrinalmente es sabido que según al fin del impuesto, se pueden presentar tres casos: el primero en que el impuesto solo tiene fines fiscales y se destina a cubrir los gastos generales del Estado.

El segundo en que el impuesto tiene un fin fiscal, pero se aplica a ciertos gastos especiales, que es lo que ocurre en el presente caso y, por último, en el tercero en que el impuesto tiene fines extra-fiscales.

El artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Fundamental establece: "Son obligaciones de los mexicanos: - IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

Ahora bien, esa obligación tiene por objeto la satisfacción de los gastos públicos que el Estado debe cu-

en beneficio de la colectividad. Que con los impuestos deban cubrirse los gastos públicos no constituye una prohibición, para que el tributo, por la ley del Congreso, se destine desde su origen a cubrir un gasto especial, si es en beneficio de la colectividad y a ello está obligado el Estado. Si alguna prohibición contiene el precepto, no es otra que la de que el impuesto se destine a fines diferentes a los del gasto público, pero en el caso se destinó al sostenimiento de la Universidad del Estado, que es un gasto público.

En consecuencia es correcta la consideración que al respecto hace el Juez de Distrito en su sentencia al referirse a la fracción IV del artículo 31 constitucional, ya que mientras el impuesto se destine a un gasto público, se estará cumpliendo con el mandato constitucional de aplicar el impuesto a gastos en beneficio de la colectividad.

Este criterio fue sustentado en el amparo en revisión 4431/56, promovido por la Sección de Técnicos y Manuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República, fallado el dieciséis de abril de abril de mil novecientos setenta, por unanimidad de diecisiete votos de los Ministros: Alberto Orozco Romero, Carlos del Río Rodríguez, Mario G. Reballedo, Alberto Jiménez Castro, Manuel Rivera Silva, Ezequiel Burguete Farrera, -- Abel Huitrón y A., Rafael Rojina Villegas, Enrique Martínez Ulloa, Jorge Iñárritu, Ernesto Solís López, Ramón Canedo Aldrete, María Cristina Salmorán de Tamayo, Manuel Yáñez Ruiz, Mariano Ramírez Vázquez, Pedro Guerrero Martínez y Presidente Alfonso Guzmán Neyra.

Como un precedente que es muy importante señalar, debe citarse lo resuelto por ese H. Pleno de la Suprema Cor





te de Justicia de la Nación en el amparo 7284/67 en la sesión del 12 de enero de 1971 por unanimidad de votos de los señores Ministros: Euquerio Guerrero, Carlos del Río Rodríguez, Mario G. Rebolledo, Alberto Jiménez Castro, Manuel Rivera Silva, Ezequiel Burguete Farrera, Abel Huitrón y Aguado, Rafael Rojina Villegas, Jorge Saracho Alvarez, Enrique Martínez Ulloa, Jorge Iñárritu, Ramón Cañedo Aldrete, María Cristina Salmorán de Tamayo, Manuel Vázquez Ruiz, Pedro Guerrero Martínez, Salvador Mondragón Guerra, Ernesto Aguilar Alvarez y Presidente Alfonso Guzmán Nájera, pues en tal juicio de amparo: la demanda la sentencia del Juez y el escrito de expresión de agravios son IDENTICOS con el cambio natural de nombres de los quejosos y fecha, habiéndose negado el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos.

Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 103 fracción I, 107 fracción VIII inciso a) de la Constitución Federal; 84 fracción I inciso a) y 91 de la Ley de Amparo se resuelve:

PRIMERO.- Se declara firme el sobreseimiento respecto al acto reclamado del Tesorero General del Estado de Chihuahua, consistente en el refrendo del Decreto 293, expedido por el Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia en la parte que se revisa.

TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Solano de Ramírez y coagraviados, contra los actos del Congreso del Estado de Chihuahua, Gobernador de la misma Entidad y Recaudador de Rentas del Estado, consistentes en la expedición, promulgación, aplicación y ejecución del Decreto mencionado en el punto anterior.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución - vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad archívese el toca.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno por unanimidad de diecisiete votos de los señores Ministros Guerrero López, Rebolledo, Jiménez - Castro, Rivera Silva, Burguete, Huitrón, Saracho Alvarez, - Martínez Ulloa, Inárritu, Solís López, Canedo, Salmorán de Tamayo, Vázquez, Guerrero Martínez, Mondragón Guerra, Agui- - lar Alvarez y Presidente en funciones Ramírez Vázquez. - Fue ponente el C. Ministro Huitrón. - Firman los CC. Presi- - dente en funciones y Ministros que intervinieron con el C. Secretario General de Acuerdos que da fe.

COTEJO;

Vo. Bo.

spb.

EL PRESIDENTE EN FUNCIONES

MARIANO RAMÍREZ VÁZQUEZ

MINISTROS:

EUQUERIO GUERRERO LÓPEZ

MARIO G. REBOLLEDO

ALBERTO JIMÉNEZ CASTRO

MANUEL RIVERA SILVA

EZEQUIEL BURGUESTE FARRERA

ABEL HUITRÓN Y AGUADO

JORGE SARACHO ALVAREZ

ENRIQUE MARTÍNEZ ULLOA

JORGE INÁRRITU

ERNESTO SOLÍS LÓPEZ

RAMÓN CANEDO ALDRETE

MA. CRISTINA SALMORÁN DE TAMAYO

MANUEL VÁZQUEZ RUIZ

PEDRO GUERRERO MARTÍNEZ

SALVADOR MONDRAGÓN GUERRA

ERNESTO AGUILAR ALVAREZ



- 27 -

A. Rev. 7282/67.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

  
 LIC. RAUL CUEVAS M.

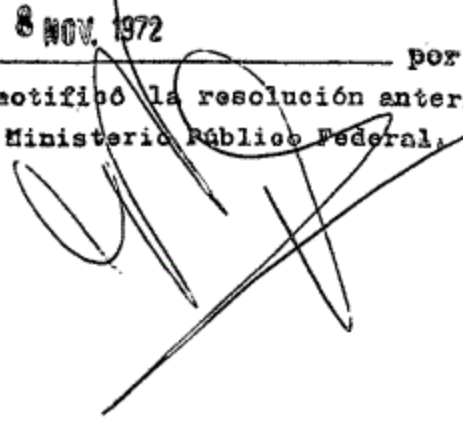
ESTA FOJA PERTENECE AL AMPARO EN REVISION 7282/67 PROMOVIDO  
 POR MARIA SOLANO DE RAMIREZ Y COAGRAVIADOS.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

  
 LIC. RAUL CUEVAS M.

18 NOV. 1972

En \_\_\_\_\_ por lista de la misma  
 fecha, se notificó la resolución anterior a los intere-  
 sados y al Ministerio Público Federal.



ME\*



SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SEGUNDA OFICINA  
DE TRAMITE

Toca # 7282/67

México, Distrito Federal, a trece de febrero de mil novecientos setenta y tres.

Visto lo resuelto por el Tribunal en Pleno de esta Corte, el 9 de febrero de 1971, en que confirmó la sentencia recurrida, y negó el amparo, con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se acuerda:

I.- Con transcripción de este acuerdo, devuélvanse los autos anexos a su lugar de procedencia y archívese este toca.

II.- Notifíquese.

Lo acordó y firma el ciudadano licenciado Mariano Ramírez Vázquez, en funciones de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por libiste rio de Ley. Doy fe.

HM/dhc/hgm.

19 FEB. 1973

por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior a los interesados.





SEGUNDA  
CORTES DE  
LA NACION

1533

282/67

67

AL C.

JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO

Chihuahua, Chih.

En el tocarelativo al juicio de amparo en  
revisión promovido por MARIA SOLANO DE RAMIREZ y coagra-  
viados, contra actos DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUA-  
HUA y otras autoridades, el C. Presidente de esta Corte  
proveyó un acuerdo que a la letra dice:

"México, Distrito Federal, a trece de fe-  
brero de mil novecientos setenta y tres.- Visto lo re-  
suelto por el Tribunal Pleno de esta Corte, el 9 de  
febrero de 1971, en que confirmó la sentencia recurri-  
da, y negó el amparo, con fundamento en el artículo 91  
de la Ley de Amparo, se acuerda:- I.- Con transcripción  
de este acuerdo, devuélvanse los autos anexos al su lu-  
gar de procedencia y archívense este toco.- II.- Notifi-  
quese.- Lo acordó y firma el ciudadano licenciado Ma-  
riano Ramírez Vázquez, en funciones de Presidente de -  
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por minister-  
rio de Ley, Day Fe.- Mariano Ramírez Vázquez.- Raúl -  
Cuevas Mantecón.- Firmas."

M  
Lo que sepermite transcribir a usted, pa-  
ra su conocimiento y efectos legales que procedan, de-  
volviéndole en 84 fojas útiles, el expediente número -  
230/67. Sirvase acusar recibo.

Le reitero mi atenta consideración.

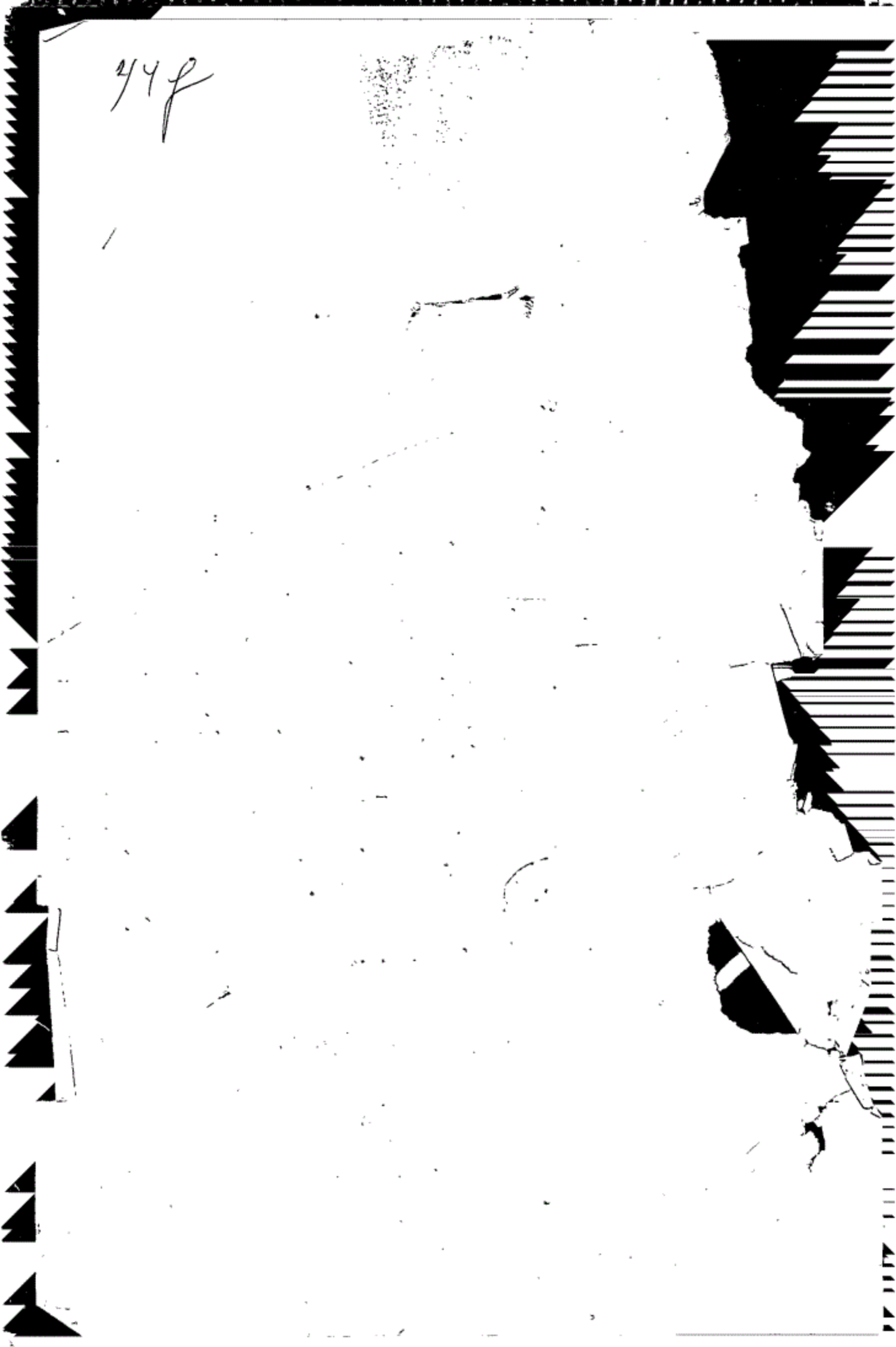
México, D.F., a 3 de marzo de 1973

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS



MANUEL TORRES BUENO

442





44

10